

Memoria
Diálogo Mesoamericano con seguimiento por Internet
**Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación: Implicaciones para
Comunidades Forestales**

**12 - 14 de Noviembre de 2009
San Salvador, El Salvador**

B*i*C

BANK INFORMATION CENTER



PRISMA



PRISMA, Fundación de Utilidad Pública radicada en El Salvador, trabaja por la revalorización social y ambiental de las comunidades y espacios rurales dentro de los procesos de desarrollo.

PRISMA enfoca su accionar en la movilización de conocimiento relevante para acciones e iniciativas que contribuyan simultáneamente al fortalecimiento de los medios de vida rurales y al mejoramiento del manejo de los recursos naturales en la región centroamericana.

PRISMA enfatiza la relación de los recursos naturales con los medios de vida de las comunidades rurales, porque una gran parte de los pobres rurales y especialmente los más pobres, dependen críticamente de su acceso a la base de recursos naturales para satisfacer sus necesidades más fundamentales. Asimismo, PRISMA reconoce que es posible mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales mediante opciones vinculadas al manejo sostenible de los recursos naturales. Finalmente, PRISMA considera que esas opciones, en la medida que fortalecen el papel de las comunidades rurales en la gestión sostenible de los recursos naturales, proporcionan beneficios a la sociedad en su conjunto.

La **Iniciativa Colaborativa de Diálogo e Investigación sobre Dinámicas Territoriales en Centroamérica**, lanzada en Mayo del 2006 y facilitada por PRISMA, busca comprender mejor la nueva territorialidad que está emergiendo en Centroamérica, a raíz de las grandes transformaciones económicas, las acciones de grupos económicos transnacionalizados y las respuestas de actores territoriales y sectores sociales que desarrollan sus estrategias de vida en una lógica de resistencia, adaptación o innovación al nuevo contexto globalizado. Como esa nueva territorialidad tiene fuertes implicaciones para las estrategias de vida, el manejo de los recursos naturales y las iniciativas de gestión territorial de comunidades rurales y locales, en el marco de la Iniciativa, se avanzará en la generación de lecturas territoriales en Centroamérica que tengan el potencial de alimentar diálogos sustantivos sobre pobreza, ambiente y gestión territorial en la región. Las prioridades temáticas de la Iniciativa son las siguientes: a) Turismo; y b) Movilidad de las personas.

© Fundación PRISMA 2010

Esta publicación está liberada bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir Obras Derivadas Igual. Para mayor información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CL



prisma@prisma.org.sv www.prisma.org.sv
3ª Calle Poniente No. 3760, Col. Escalón, San Salvador
Tels.: (503) 2298 6852; (503)2298 6853, (503)2224 3700; Fax: (503)2223 7209

Introducción

Alberto Chinchilla, ACICAFOC



El *Diálogo Mesoamericano Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación: Implicaciones para comunidades forestales*, es parte de un esfuerzo conjunto entre la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), el Bank Information Center (BIC) y la Fundación PRISMA.

En Mesoamérica, organizaciones de agroforestería comunitaria y organizaciones indígenas han logrado poner sobre la mesa temas relevantes sobre el papel de las comunidades en el manejo sostenible de los bosques. Dichos temas se relacionan con la tenencia de la tierra, los derechos y la participación, entre otros. Sin embargo, en los últimos años, las perspectivas de implementar acciones relativas a REDD están replanteando muy rápidamente temas como estos, sobre todo considerando que han sido las comunidades las que por años han trabajado y han desarrollado los esfuerzos más importantes de manejo sostenible de los bosques (donde hay agua, biodiversidad y otras oportunidades, donde se previenen y combaten incendios, etc.) y que a pesar de ello, a menudo, los enfoques y tendencias de REDD no reconocen el papel que las comunidades han venido desarrollando en la sostenibilidad de los bosques.

Por ello, este Diálogo pretende ser diferente, no convencional, tratando de abordar el tema de REDD pero con la gente que está en los territorios, de modo que los participantes sientan que se pueda hablar sin temor sobre lo que significa REDD, las oportunidades y riesgos que tiene para las comunidades indígenas y campesinas de la región mesoamericana.

Como parte de los objetivos, este Diálogo Mesoamericano procura propiciar un espacio abierto y franco, en el que se puedan conocer las amenazas y oportunidades planteadas por los mismos actores que habitan en los territorios boscosos. Asimismo, el Diálogo busca fortalecer vínculos y relaciones de colaboración e intercambio entre Centroamérica y México, sobre la manera en que se están abordando diversas iniciativas sobre REDD en los países. En ese sentido, se intenta compartir algunos puntos de agenda que permitan visualizar lo que las comunidades indígenas y de forestería comunitaria han venido haciendo sobre estos temas en Mesoamérica, de modo que ello contribuya a la identificación de criterios que eventualmente formen parte de los estándares e indicadores socio ambientales que se busca implementar a nivel global.

Inauguración

Herman Rosa Chávez

Ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador



Sin lugar a dudas, en la actualidad existen interrogantes claves con relación a REDD. ¿Es realmente una vía fácil que se traducirá en un huracán de financiamiento, capaz de arrasar con las posibilidades locales? O por el contrario, ¿Puede ser REDD una plataforma que logre reconocer los aportes y avances logrados hasta el momento, fortalezca los procesos y pueda ofrecer nuevas oportunidades para la gente de las comunidades? Como reflejo de la controversia, uno de los objetivos propuestos para REDD —aún en discusión y no aprobado— propone: “Facilitar el desarrollo sostenible, reducir la pobreza y responder al cambio climático en los países en desarrollo, en vez de ser un mecanismo para ayudar a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos para reducir emisiones” (Non Paper 39). Las negociaciones globales indican que el proceso se prolongará más allá de Copenhague.

Independientemente de la posición adoptada, no se debe perder de vista que de fondo está la problemática del cambio climático. Al observar las recientes lluvias torrenciales ocurridas en el país, vale la pena preguntarse si representan una situación puntual o si las alteraciones en el clima harán más frecuente este tipo de fenómenos. Al parecer, la segunda opción es la más probable; por lo tanto el tema de REDD se vincula con la agenda de adaptación. Es necesario identificar la mejor manera de aprovechar estos mecanismos para reducir las vulnerabilidades y generar procesos de restauración. Sin embargo, existen temas conflictivos —en El Salvador y en otros países— como el acceso y control de los recursos naturales, por ejemplo las zonas de manglares en las áreas costeras.

La historia de la situación forestal en El Salvador está vinculada a la preocupación por la protección del suelo y del recurso hídrico. De esta manera se fue conformando la agenda forestal en el país. Ante el nuevo contexto global y regional que tenemos, ¿Cuál es el rol de lo forestal?, y ¿De qué manera se pueden vincular estos temas de una manera más fuerte con la agenda de adaptación? Se espera que a medida que transcurra este diálogo se avance en estos y otros temas, que si bien es cierto son fundamentales para El Salvador, igual no están ajenos a las experiencias y realidades de otros países.

Inauguración

Victoria Flores

Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)

El tema REDD todavía no es conocido desde las perspectivas de nuestras comunidades. Resulta relevante propiciar este intercambio de opiniones con varios de los actores vinculados directa o indirectamente con la temática. A partir de ahí, el gran reto de las organizaciones que comenzamos a trabajar el tema es de qué manera transferimos los conocimientos y la información a la gente de las comunidades indígenas y campesinas a las cuales representamos, quienes finalmente son las y los responsables de realizar las actividades del manejo forestal en los territorios. Para ACICAFOC, el tema de REDD adquiere mucha importancia, pues se ha venido trabajando con las comunidades el manejo forestal, sin embargo, en la actualidad, estas prácticas llegan a la mesa de discusión como un “tema de moda.”



A pesar de que las dinámicas de Centroamérica presentan puntos en común, cada país tiene sus propias prioridades específicas a las cuales ha de atender. REDD es un tema actual y todos tenemos que insertarnos y participar en la discusión porque si no, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Desde ACICAFOC se valora positivamente este tipo de espacio de participación amplia, desde los cuales, a partir de los actores se pueden construir las estrategias adecuadas para avanzar en la mejor dirección posible. Aunque a veces resulta difícil reconocer el trabajo y las capacidades locales, es imprescindible revalorizar el trabajo que han venido realizando las comunidades indígenas y campesinas en cuanto a las acciones de mitigación para el cambio climático, al tiempo que se fomenta la cooperación entre diferentes niveles.

De igual manera, es fundamental el seguimiento posterior que pueda darse a las acciones acordadas. Ojala, al final de las jornadas podamos tener estrategias, normas y líneas claras de seguimiento que faciliten la implementación de las iniciativas. De esta manera, se busca garantizar impactos positivos en los territorios y comunidades indígenas y campesinas.

PANEL I:

El contexto de REDD y las negociaciones internacionales sobre cambio climático

Miguel Lovera, Asesor de Ministro de Medio Ambiente de Paraguay

Negociaciones sobre cambio climático: El acuerdo que no acordaremos en Copenhague

La reunión a ser celebrada en diciembre próximo en Copenhague representaba una gran esperanza para lograr un acuerdo, o al menos sentar las bases para reducir realmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no será así. Años atrás, con el Plan de Acción de Bali se establecieron dos grandes objetivos: a) las metas de reducción de los países del Anexo I del Protocolo de Kyoto; y b) las negociaciones de un acuerdo con nuevas metas, que incluya también acciones de reducción en los países en vías de desarrollo. Además, el mandato de Bali contemplaba otros aspectos igualmente importantes, tales como los años del período de compromiso y los mecanismos a ser utilizados por los países desarrollados para lograr sus reducciones, principalmente a través de acciones en sus territorios y no a través de compensaciones. Esas reducciones debían significar el 40% para el 2020 y el 80% en el 2050, a sugerencia del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático).

Contrario a lo esperado, los países desarrollados no han considerado estos acuerdos lo suficientemente vinculantes como para cumplir con ellos, por lo que los avances esperados en cuanto a reducción de emisiones son bastante limitados. Hasta el momento, no se han podido establecer metas concretas y realistas que contribuyan a sacarnos de la problemática que enfrentamos al seguir el modelo de desarrollo precisamente promovido por esos países. Inclusive, la apertura de nuestros países hacia lograr un acuerdo fue genuina, pero cuando no se toman en cuenta las propuestas, y a los planteamientos no se les otorga mayor atención, uno se siente violentado y excluido de los procesos de negociación. Esta situación explica la actitud de los países africanos — apoyada por otros países — de amenazar con retirarse de la reunión de Barcelona.

Con este panorama, para nada halagador, se llegará a Copenhague, con la ausencia de los elementos clave que permitan lograr un acuerdo real, sólido y orientado a alcanzar la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero a los niveles de 1990. Otro de los aspectos fundamentales del Plan de Acción de Bali consiste en los compromisos futuros que deben asumir todos los países del mundo para enfrentar el cambio climático, especialmente los procesos de adaptación. Tampoco hay muchos avances en este sentido, por lo que, ante la falta de tiempo para seguir negociando, estamos en un estado prácticamente de estancamiento de cara a Copenhague.

Luego de la reunión de Barcelona, algo que quedó claro fue la imposibilidad de lograr que los países del Anexo I asuman compromisos reales, pues Estados Unidos —el mayor emisor de gases— no está dispuesto a beneficiar a terceros y ejerce una gran influencia sobre los demás países. Dentro de este contexto, aspirar a un acuerdo justo es improbable, por lo que regresar de la Cumbre de Copenhague con las manos vacías no debería sorprendernos.

PANEL I: El contexto de REDD y las negociaciones internacionales sobre cambio climático

Manuel Estrada, experto en cambio climático y REDD Negociaciones sobre cambio climático y REDD

El tema de REDD no puede comprenderse de una manera aislada, pues forma parte de una agenda mayor, fundamentada en los compromisos post 2012, que fueron asumidos por todos los países. El proceso de negociación de esos compromisos se inició a partir de dos momentos diferentes: 1) la revisión del artículo 3.9 del Protocolo de Kyoto en Montreal (2005), en el cual se establecen los compromisos para los países desarrollados y se discuten las acciones necesarias para cumplir con esos compromisos (por ejemplo, Mecanismos de Desarrollo Limpio e intervenciones en las tendencias de uso del suelo); 2) la convención marco que comenzó a negociarse en Bali (2007), con la finalidad principal de incrementar las respuestas al cambio climático, principalmente desde los países desarrollados, al estar estos en mejores condiciones para actuar.

En este contexto, REDD aparece como parte de los mecanismos de desarrollo limpio y de las acciones de mitigación. Paralelamente a las discusiones post Kyoto de Montreal, se abordó la petición de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea y otros 16 países con relación a la generación de incentivos positivos y políticas para reducir las emisiones por deforestación y degradación en países en desarrollo. A partir de ese momento se inician las discusiones metodológicas y políticas de REDD, tratando de definir aspectos como la construcción de una línea base, el monitoreo de los avances y la reducción real de las emisiones, entre otros. En base a las negociaciones actuales, las posibilidades para la implementación de REDD pueden enfocarse desde diferentes perspectivas:

- Los países en vías de desarrollo reducen sus emisiones, no como un compromiso adquirido, sino más bien por voluntad propia, pero a través de acciones medibles, verificables y que formen parte de una estrategia de desarrollo de largo plazo.
- Como parte de las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropriadas para cada país (NAMAs), por medio de programas de deforestación evitada de alcance nacional y/o sub-nacional.

Respecto a las fuentes de financiamiento, se identifican tres posibles opciones: 1) incentivos positivos provenientes de la venta de bonos por reducción de carbono; 2) recursos captados en empresas de países desarrollados, para implementar proyectos en países en vías de desarrollo; y 3) fondos públicos de países del Anexo I vinculados a iniciativas de cooperación para el desarrollo. El alcance de las intervenciones sobre REDD es otro de los temas en discusión. Existe la posibilidad de que sean acciones únicamente de deforestación evitada o que además incluyan aspectos como la degradación, el manejo sustentable, la conservación y el incremento de las existencias de carbono, entre otros.

Finalmente, existen propuestas en las que se presenta este nuevo mecanismo como una alternativa a ser implementada en el nivel nacional, es decir, centralizada por los gobiernos nacionales. Sin embargo, también está la idea de que puede ser desarrollada en los niveles sub-nacionales (Estados, regiones, municipios); e inclusive, que en su aplicación pudieran combinarse las dos propuestas anteriores.

PANEL I:

El contexto de REDD y las negociaciones internacionales sobre cambio climático

David Kaimowitz, Fundación Ford

¿Es REDD una oportunidad verdadera para las comunidades?



Al hablar de comunidades nos referimos a comunidades indígenas. Es importante hacer la aclaración, pues en el marco de las iniciativas REDD es importante considerar los derechos colectivos de las comunidades indígenas contenidos en el derecho internacional y en las leyes nacionales, los cuales son exclusivos de este grupo poblacional. Los siguientes son puntos clave en la coyuntura actual:

- El cambio climático es un tema que no desaparecerá de la agenda de discusión en los diferentes niveles (global, regional, nacional y local). Es un problema creciente que no pasa desapercibido por las comunidades y pueblos indígenas, y donde aspectos como el uso del suelo y el manejo forestal resultan importantes.
- REDD está en construcción, no hay mucho definido y será lo que las diferentes fuerzas políticas logran plantear y promover. Los pueblos indígenas no pueden estar ajenos a plantear su propia visión. REDD puede presentarse de maneras diferentes, incluyendo reforestación; regeneración natural; productos como café y cacao; y en sentido general, iniciativas locales. Lo esencial es asegurar aportes, desde lo forestal al uso del suelo y al cambio climático.
- La educación, la movilización y la organización social deben sentar las bases para la elaboración de propuestas alternativas. Caso contrario, REDD corre el riesgo de ser como otras políticas que sólo benefician a unos pocos. Sin embargo, de igual manera, las intervenciones pueden representar oportunidades para crear nuevas fuentes de ingresos, nuevas formas de sobrevivir en los territorios para las comunidades indígenas. Ahora bien, también existen amenazas reales. Por ejemplo, desde que se otorga valor monetario al carbono de los bosques, pueden aparecer conflictos por el derecho de esos recursos, inclusive desde las instancias gubernamentales como se observa en Guatemala y Panamá.
- La existencia de empresas petroleras y energéticas que ven en REDD y en los mercados de carbono una manera de resolver sus problemas de emisión; así como de organizaciones internacionales esperando financiar grandes burocracias, podrían impedir que los beneficios lleguen justamente a las comunidades indígenas. Es vital el fortalecimiento de las organizaciones y la construcción de capacidades para la generación de propuestas desde los territorios.
- Actualmente se presenta una gran oportunidad de abordar la temática a nivel de regional (México y Centroamérica) y luego lograr avances en los niveles nacional y local. Desde lo regional se facilita la construcción de propuestas más sólidas, con un profundo contenido de justicia social, de diversidad y multiculturalidad, de defensa de los territorios; en fin, propuestas que logren apoyo a nivel internacional.

PANEL I:

El contexto de REDD y las negociaciones internacionales sobre cambio climático

Deborah Barry, Rights and Resources Initiative (RRI)
REDD y comunidades forestales; Preocupaciones y debate actual

El proceso internacional de diseño de REDD es muy importante, pues aún sin decisiones claras sobre la temática, no se puede negar el impacto que ya se tiene a nivel de los países. Sin embargo, algunos de los postulados iniciales del mecanismo son cuestionables. Existe un énfasis muy marcado hacia el desarrollo de las fuentes de financiamiento, inclusive más que en la tarea misma de frenar la deforestación. Además, no todos los gobiernos y negociadores comprenden las causas reales de los procesos de deforestación y degradación; mientras que se ha asumido que la capacidad de monitoreo es la más adecuada, lo cual no es cierto. Otros supuestos equivocados apuntan hacia el crecimiento rápido de REDD; la facilidad de comprar y pagar a las comunidades; y la implementación inmediata de los acuerdos de Copenhague. Lo que sí es cierto es la gran cantidad de acuerdos, fondos y proyectos orientados a apoyar a los países con la preparación para REDD. Los fondos de Noruega, a través del Banco Mundial y ONUREDD; el Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP); así como el Mercado Voluntario, son ejemplos de esas iniciativas.

Una revisión de las discusiones iniciales de REDD muestra que el mecanismo se enfocaba a frenar o evitar la deforestación y la degradación, aunque al final esto resultó ser un impacto. Es necesario entender las causas estructurales detrás de estos fenómenos e identificar cuáles son los actores que intervienen, evitando los incentivos negativos que pueden beneficiar a los que degradan en lugar de privilegiar a quienes cuidan los bosques. Dentro de esta primera aproximación, REDD se limitaba hacia las zonas de frontera agrícola, cuando la deforestación ocurre a escalas mayores. Por el contra-

REDD puede servir como un motor para

- Asegurar las tierras de las comunidades, territorios Indígenas y para otras comunidades que dependen del bosque...

O puede

- Amenazar lo que ya tienen:
 - Reconcentración estatal de tierras
 - La venta de CO₂ (y el cambio de uso de suelo) a inversionistas internacionales sin el consentimiento local.

Para hacer que REDD funcione a su favor...

Las comunidades forestales, necesitan:

- 1 Empujar para aclarar los derechos de tenencia: mapeo, visibilidad y reformas en los derechos a la tierra y los recursos.
- 2 Fortalecer sus sistemas locales de gobernanza y manejo de sus recursos naturales.
- 3 Trabajar sobre sistemas internos de costos y distribución de beneficios a lo largo del proceso (combatir las expectativas elevadas).
- 4 Llevar su capacidad de representación y manejo a mayor escala (crear organizaciones de 2do y 3er nivel - abarcar territorios más grandes).
- 5 Abrirse a comunicarse y buscar cómo colaborar con las organizaciones indígenas y campesinas (la agricultura).

rio, REDD Plus es una propuesta más amplia, al incluir reforestación, manejo sostenible del bosque, conservación y restauración de áreas degradadas; ampliando el número de actores, el tipo de acciones para la mitigación y los incentivos para quienes han conservado, entre ellos las comunidades forestales e indígenas.

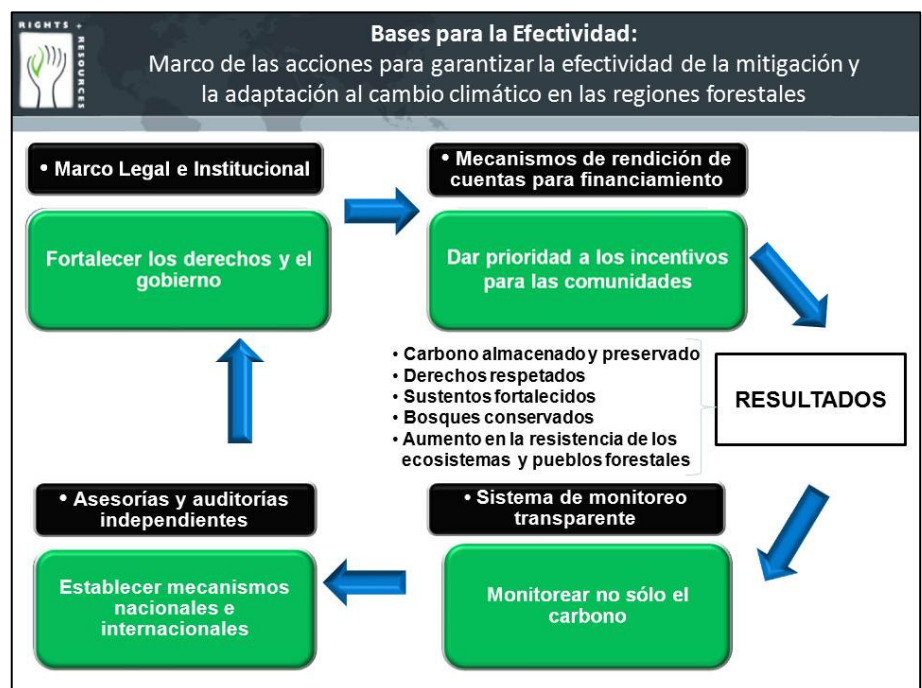
La inseguridad en la tenencia de la tierra es una de las causas generadoras de deforestación, a pesar de que es un aspecto difícil de cuantificar. REDD puede servir como motor para asegurar los derechos de tenencia sobre la tierra, así como del acceso y uso de los recursos, en beneficio de las comunidades y territorios indígenas que dependen del bosque. La organización social, el fortalecimiento de los sistemas locales de gobernanza, el manejo de los recursos y la capacidad de negociación adquieren una especial relevancia dentro de este esquema. Las organizaciones forestales deben apoyarse y vincular a las organizaciones indígenas y campesinas.

Las comunidades hacerse sentir arriba.....

Necesitan.....

- 1 Presionar para que REDD implique mayor inversión a nivel local y en las comunidades.
- 2 Empujar a sus gobiernos a endosar REDD (plus) y con compromiso de monitoreo a nivel nacional (prevenir fuga).
- 3 Aliarse con investigadores honestos para participar en establecimiento de líneas base, bancos de datos sobre organizaciones, revisión de catastros, etc..
- 4 Resistir la tentación de la venta fácil de CO₂ en el mercado internacional sin organizaciones sólidas y claras previamente.

A nivel técnico, será importante la realización de investigaciones para el establecimiento de líneas base; la revisión y actualización catastral; y reglas de participación claras en el mercado del CO₂. Cuatro preguntas se han definido en RRI que pueden servir de guía para identificar lo positivo y negativo de REDD: 1) ¿de quién es el bosque? (tenencia y acceso a recursos); 2) ¿quién paga o recompensa y cómo se reportan esas cuentas?; 3) ¿cómo monitorear con transparencia; y 4) ¿cómo asegurar representación, independencia y auditoría en el manejo de los fondos? Todo esto, dando prioridad a los beneficios e incentivos para las comunidades.



PANEL I: El contexto de REDD y las negociaciones internacionales

Diálogo general entre participantes

El primer diálogo se enfocó en diferentes aspectos relacionados con el estado actual de REDD (avance de las negociaciones y los acuerdos internacionales), la relación de esta iniciativa como un mecanismo para enfrentar la problemática del cambio climático, así como diversos aspectos clave al momento de pensar en la implementación de las acciones REDD en los países de la región –por ejemplo, la participación de las comunidades y pueblos indígenas, la necesidad de fortalecer las alianzas y el liderazgo entre las organizaciones, y la necesidad de crear nuevas modalidades de institucionalidad que garanticen tanto la gobernabilidad forestal como la representación y la gobernabilidad política.

De las negociaciones y acuerdos sobre REDD

Existe confusión en la manera como se está negociando REDD, pues forma parte de la dinámica del Plan de Acción de Bali y no del Protocolo de Kyoto como podría creerse. Actualmente se está discutiendo sobre los mecanismos, pero todavía no se han abordado temas como los mercados de carbono, ni fondos específicos. Al menos no son decisiones que se han tomado. A pesar de lo complejo de la situación, es posible todavía alcanzar un acuerdo sobre REDD en Copenhague, aunque no necesariamente se lograrán consensos sobre la reducción de emisiones por parte de los países desarrollados. Esto sí representa un obstáculo, pues REDD por sí solo no alcanza a resolver el problema del cambio climático.

REDD es un proceso eminentemente político, así que de alguna manera los temas, decisiones y acuerdos estarán determinados por la correlación de fuerzas existentes. Uno de los retos sería ir pensando en cómo hacer –en caso que esa sea la realidad– del fracaso de Copenhague una verdadera oportunidad, especialmente porque la COP 16 será en México y podría ser aprovechada para avanzar en las propuestas planteadas como región.

Tomando en cuenta lo avanzado de las negociaciones y la poca posibilidad de influir en ellas, un aporte importante sería continuar los diálogos a nivel interno de nuestros países. De esta manera, la futura participación o no de cada país en las iniciativas REDD estará validada por procesos de consulta, participación y consenso internos.

REDD y cambio climático

Es imposible desvincular a REDD del manejo y conservación de los bosques, así como de la restauración de las áreas degradadas y de los ecosistemas forestales. Sin embargo, una problemática ma-



yor, la del cambio climático, debería ser nuestra principal preocupación en la actualidad. Cualquier decisión e iniciativa en el marco de REDD no debería sustituir los esfuerzos de mitigación que los países desarrollados están llamados a implementar. Si los bosques se colocan en el mercado, y esos países cumplen sus compromisos pagando bonos de carbono sin disminuir sus emisiones, la temperatura seguirá aumentando igual, y dentro de 50 años esos bosques – con toda su riqueza y biodiversidad – habrán desaparecido.

Por lo tanto, el punto central es la mitigación del cambio climático y la manera como REDD puede contribuir a lograr resultados verdaderos, más que aparentes. Después de todo, las comunidades rurales resultan las más afectadas por estos fenómenos, las inundaciones recientes de El Salvador fueron un claro ejemplo de esta realidad.

Participación de las comunidades indígenas

Durante las últimas dos décadas, las comunidades indígenas han realizado las experiencias más exitosas con relación a los derechos de la tierra en América Latina. Sin embargo, es necesario incrementar la articulación con las demás organizaciones que están trabajando en los bosques, las cuales no necesariamente comparten la cosmovisión indígena. Una relectura de cómo organizar las estrategias de lucha, y a partir de ahí la construcción de una identidad más amplia para reivindicar los derechos, puede facilitar la creación de alianzas más sólidas.

La presencia y los aportes de las comunidades indígenas no siempre son tomados en cuenta, al menos para el caso de Panamá, a pesar de que los ojos están puestos en los bosques que en su gran mayoría están ubicados en las regiones indígenas. Varias preguntas surgen de esta situación: ¿dónde están los verdaderos actores, aquellos vinculados directamente con los bosques?, ¿cuál ha sido, es y será su rol?, ¿cuáles son sus apreciaciones y propuestas?, ¿qué papel podrían asumir dentro de un esquema como REDD? Con relación al tema de la propiedad de los recursos, existe una discusión pendiente entre la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá, pues mientras la primera defiende la posición de que el carbono es propiedad del Estado; la segunda reivindica esa propiedad para los pueblos indígenas en tanto éstos son los responsables de cuidar los bosques, además de estar ubicados en sus territorios.

En Costa Rica, la mayor parte de los recursos naturales y en conservación se encuentran localizados en territorios indígenas. La cosmovisión indígena es la base de la relación armónica y de respeto de esos pueblos con la naturaleza de su entorno a lo largo de la historia. Mientras los países llamados “industrializados” son los mayores responsables de la problemática actual con el cambio climático y no asumen un rol más activo en las soluciones, las comunidades y pueblos indígenas siguen asumiendo un papel protagónico en la conservación de los bosques.

Ahora bien, ¿dónde radica el poder de negociación de las comunidades y territorios indígenas si no es en los resultados alcanzados hasta el momento? El manejo forestal comunitario en México demuestra que no hay pérdidas importantes de bosque en las zonas intervenidas. Igual situación se puede verificar para la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en Guatemala. La trayectoria de estas experiencias debe convertirse en poder de negociación real, al momento de negociar frente al mercado voluntario de carbono, a los donantes y a los organismos de cooperación internacional.

Gobernabilidad forestal y gobernabilidad política

El problema de la deforestación, abordado desde el contexto de REDD, implica valorar aspectos como la institucionalidad en la región; los avances respecto a la transparencia; la capacidad de los gobiernos para tratar los problemas desde una perspectiva de país; y la voluntad y efectividad de coordinación para el trabajo intersectorial. A la vez, REDD podría implicar negocios, corrupción, tráfico ilegal de madera, uso de la fuerza e incumplimiento de la normativa existente. Por lo tanto, la gobernabilidad forestal no puede entenderse separada de la gobernabilidad política. La realidad de los gobiernos locales y los resultados de los procesos de descentralización en la región emergen como elementos valiosos de análisis.

Una de las reflexiones derivadas del ejercicio de revisión y análisis de los procesos post-Mitch, en Honduras, fue que se intentó cambiar las realidades haciendo lo mismo, repitiendo los errores del pasado. Vale la pena preguntarse ¿cuál es la lectura que se está haciendo de la realidad actual? A partir de ahí se podrá pensar en REDD desde una perspectiva que aporte al fortalecimiento de lo logrado hasta el momento con las experiencias de los últimos 30 años en forestería comunitaria y otros procesos de manejo forestal en Centroamérica y el resto de la región.

Articulación, nuevas alianzas y liderazgo

La problemática del cambio climático exige la construcción de una nueva visión, el replanteamiento del territorio, sus dimensiones y el rol de los actores; y por lo tanto, de una nueva institucionalidad. Si no hay cambios en los paradigmas, difícilmente se lograrán avances en la manera de ver la realidad. En este sentido, es necesario pensar en nuevas y mayores alianzas interinstitucionales — trascendiendo inclusive lo regional — que permitan potenciar los mecanismos políticos utilizados para hacer incidencia e influir en estos temas. Precisamente, uno de los principales problemas del sector forestal es el aislamiento y la falta de articulación con otros sectores — a nivel de ministerios inclusive — como áreas protegidas y cambio climático. Parte de este problema se debe a los conflictos interinstitucionales respecto al protagonismo en los procesos de ejecución y negociación.

El liderazgo está llamado a jugar un papel decisivo en la articulación efectiva de las instituciones y las dinámicas territoriales y ha de estar presente en los diferentes niveles, desde lo regional-nacional hasta lo local-comunitario. A pesar de que la propuesta de REDD viene de arriba hacia abajo, las experiencias que han surgido desde la base comunitaria indican un camino diferente, para lo cual es imprescindible fortalecer las capacidades de liderazgo presentes en las organizaciones de base. Así, sería posible garantizar mejoras en la calidad de vida de las comunidades de una manera más integral y participativa.

Políticas forestales y manejo productivo

La viabilidad de las políticas forestales implica el análisis de normativas, estándares y aspectos legales, entre otros, que facilitan o entorpecen el manejo del bosque en la actualidad. Independientemente de si se habla de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en el pasado reciente o de REDD en la actualidad; en definitiva, el tema central es el desarrollo forestal. Igualmente, el componente productivo resulta clave para la sostenibilidad de las iniciativas, pues si las comunidades no pueden vivir del bosque, al menos como una fuente importante de ingresos, poco se podrá avanzar con los esquemas de servicios ambientales (con o sin pago).

PANEL II: Posiciones, estrategias y acciones de los gobiernos de Mesoamérica con relación a REDD

Ricardo Rivera, Comisión Nacional Forestal, México



En la actualidad, desde la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se está preparando un programa REDD+, el cual consiste en adicionar el componente de manejo forestal sustentable a la base REDD. La decisión fue tomada luego de concluir un estudio realizado en el 2008 con el propósito de analizar los costos para poder hacer frente al cambio climático, en el cual se concluía que a través de la reducción de la deforestación y la degradación los costos de la mitigación son menores. Existe la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático formada por diferentes oficinas del gobierno, entre ellas: Secretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Hacienda; Secretaría de Desarrollo Rural; Secretaría de Desarrollo Social, entre otras. En cada una de estas instancias se establecieron metas cuantificables orientadas a la disminución de emisiones, identificando la participación específica de cada Secretaría en el proceso. Adicionalmente, se ha creado un subgrupo REDD al interior de la CONAFOR, con el objetivo de impulsar programas que contribuyan a disminuir la deforestación y la degradación, aunque no estén directamente relacionados con REDD.

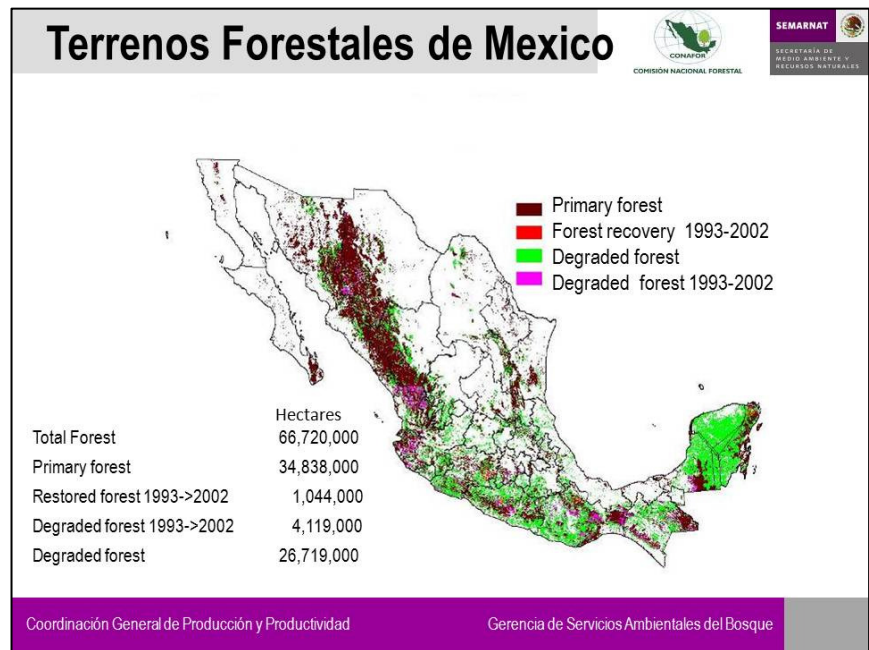
La CONAFOR, a partir del 2007, ha venido participando en el Programa FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) del Banco Mundial y en otros foros internacionales, diseñados para ir sumando esfuerzos alrededor de la estrategia REDD. En nuestro caso, se ha considerado la importancia de promover un diálogo nacional y el fortalecimiento institucional e interinstitucional como una manera de facilitar la adopción de las medidas y políticas más apropiadas. En este sentido, se está planteando una estrategia REDD para México –tomando en cuenta la información del inventario nacional forestal– que incluya reducir la deforestación y la degradación, asegurando un manejo forestal sustentable. Hasta el

Papel Institucional de CONAFOR	
Se prevé que la CONAFOR mantenga un papel relevante en las tres etapas de un mecanismo de REDD*:	
1)	Desarrollo de una estrategia nacional de REDD, incluyendo diálogo nacional, fortalecimiento institucional y actividades de demostración.
2)	Implementación de políticas y medidas que se propongan en la estrategia nacional de REDD.
3)	Pago por resultados sobre la base de cuantificación de emisiones y remociones de bosques, contra niveles de referencia convenidos.
*Fuente: Meridian Institute. Diciembre 2008. Reducción de Emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD): Reporte de evaluación de opciones.	
Coordinación General de Producción y Productividad	Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque

¿Cuál es la propuesta internacional de México para REDD hasta ahora?	
1.	MARCO. Deforestación y Degradación Forestal, incluyendo el mejoramiento de sumideros de carbono (REDD+MFS).
2.	NIVEL DE REFERENCIA. Línea de base histórica, preferentemente observando los últimos diez años.
3.	DISTRIBUCIÓN. No definida aún, aunque se está considerando la experiencia del programa nacional de Pago por Servicios Ambientales y el Fondo Forestal Mexicano.
4.	FINANCIAMIENTO. Mercado directo y Fondo Voluntario. Los Fondos son fundamentales para la creación de capacidades, para conservación y para manejo forestal sustentable.
5.	ESCALA. La implementación de actividades a nivel sub-nacional y /o nacional deberá determinarse voluntariamente por cada país. Los procesos sub-nacionales para algunos países pueden constituir un paso intermedio hacia el nivel nacional.
6.	MONITOREO. La contabilidad de bonos o créditos sería nacional, con un sistema nacional de monitoreo compatible con las metodologías de monitoreo para los proyectos con ejecución sub-nacional.
Coordinación General de Producción y Productividad	Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque

momento, se pretende implementar en una escala nacional, aunque se pueden realizar actividades en la escala subnacional. Igualmente, se ha planteado un sistema de monitoreo a nivel nacional que permita la cuantificación de resultados y la distribución de bonos y/o créditos entre las áreas participantes. El financiamiento provendría, en un primer momento, del Banco Mundial, a través de fondos del FCPF.

Los programas PRO-ARBOL (dentro de las iniciativas de pagos por servicios ambientales), PRODEFOR (desarrollo forestal) y PROCYMAF (manejo comunitario), son ejecutados a través del CONAFOR y deberán servir de apoyo a la estrategia REDD. Juntos forman un paquete que promueve: a) el desarrollo forestal sustentable; b) la gestión comunitaria; c) los servicios ambientales; d) la conservación y restauración; e) la reforestación y las plantaciones comerciales. A través del programa PROCYMAF se persigue la creación de capacidades en las comunidades para que sus habitantes puedan mejorar sus procesos de organización y producción. Además, la distribución de los grupos indígenas en México coincide con las áreas de mayor presencia de bosques y selvas, por lo que se han enfocado los servicios ambientales hacia esas zonas, representando un apoyo importante para esas comunidades.



PANEL II: Posiciones, estrategias y acciones de los gobiernos de Mesoamérica con relación a REDD

María Sujei Blanco, Autoridad Nacional del Ambiente, Panamá



Las empresas reforestadoras nacionales e internacionales han estado operando en la zona del Darién desde hace aproximadamente cinco años, enfocadas básicamente en la compra de áreas deforestadas con la finalidad de desarrollar actividades forestales para el comercio. Entre las dinámicas derivadas de estos procesos están la venta de terrenos dedicados a la ganadería para su conversión en áreas forestales, así como prácticas forestales no sostenibles, como la tala ilegal, el avance de la frontera urbana y el incremento de las condiciones de pobreza.

La Autoridad Nacional del Ambiente, como ente coordinador y gestor de las políticas públicas medioambientales, tiene entre sus propósitos elevar la Política Ambiental a nivel de política de Estado, trascendiendo el nivel actual de política de gobierno, al considerar que este cambio facilitaría la agilización de los procesos y garantizaría la continuidad de los mismos, sin importar los movimientos en la composición política del gobierno nacional. El Sistema Interinstitucional del Ambiente funciona como instancia responsable de la plataforma de coordinación. El carácter interinstitucional no se limita únicamente a la participación de otras instituciones y ministerios, sino además a la vinculación de la sociedad civil y ONGs, a través de las Comisiones Consultivas Ambientales. Otros actores clave, por su vinculación con posibles alternativas productivas y de generación de ingresos, son el Ministerio de la Pequeña y Mediana Empresa, la Autoridad Panameña de Turismo y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

En la actualidad estamos en la etapa de diálogo y consulta para poder elaborar mejor la propuesta, por lo que existen oportunidades abiertas para hacer y recibir los aportes provenientes desde los diferentes sectores que estarán involucrados directa o indirectamente con la estrategia.

PANEL II: Posiciones, estrategias y acciones de los gobiernos de Mesoamérica con relación a REDD

Marcel Oseida, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala

La deforestación es un problema para toda la región centroamericana, y Guatemala no es la excepción. Al revisar la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático encontramos que las emisiones provenientes de la quema de bosques y el avance de la frontera agrícola alcanzan el 17% del total de emisiones. En la última década, Guatemala ha experimentado dos fuertes sequías que han afectado significativamente la producción nacional de granos básicos, comprometiendo así la seguridad alimentaria. Los esfuerzos como país deben ir enfocados a impulsar procesos de adaptación, reconociendo que, a pesar de las altas expectativas actuales, REDD por sí mismo no puede resolver definitivamente la problemática de la deforestación.



Con el propósito de comprender mejor el fenómeno de la deforestación en Guatemala se han identificado las principales causas estructurales, directas e indirectas, a partir de un análisis impulsado por el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Medio Ambiente: *estructurales* (crecimiento poblacional, cultura forestal, educación, pobreza — incluyendo la tenencia y distribución de la tierra); *directas* (cambio de uso del suelo, pérdida de cobertura forestal, incendios forestales, plagas, tala ilegal de madera); *indirectas* (desempleo en las áreas rurales, debilidad institucional para monitoreo, ausencia de políticas públicas).

El costo de implementar una estrategia REDD es uno de los principales desafíos, tomando en cuenta la situación económica actual del país y la falta de estudios que aporten información en ese aspecto. La mayoría de zonas incluidas dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas albergan las reservas de carbono forestal por lo que, en algún momento, pudiera pensarse en una propuesta de vincularlas al mercado internacional de carbono. Sin embargo, el panorama es bastante complejo como para establecer con claridad el destino de esos fondos, debido a la participación de diversos actores dentro de los procesos (ONGs, gobierno nacional y local, entre otros).

Para el caso de Guatemala, REDD representa una muy buena oportunidad para readecuar las políticas públicas, revalorizar el sector forestal, y lograr la transversalización del tema del cambio climático. Otro aspecto que se ha tomado en cuenta al momento de construir la estrategia REDD es la necesidad de promover un consenso entre las diferentes instituciones ambientales del país, a través de diálogos participativos entre diferentes sectores. La mejora en el acceso al conocimiento técnico, social y económico; así como la conservación y el reconocimiento de los bienes y servicios ambientales, representan otros beneficios relacionados a REDD. Finalmente, dentro del marco del cambio climático, a través de la creación de una Política Nacional, se han generado una serie de instrumentos técnicos con el objetivo de fortalecer los esfuerzos que se realizan. El establecimiento de una Comisión Presidencial, las mesas de diálogo con sectores de la sociedad civil y la propuesta de Ley Marco de Cambio Climático — actualmente en el Congreso — son una muestra de acciones que permiten avanzar en el abordaje de las problemáticas mencionadas.

PANEL II: Posiciones, estrategias y acciones de los gobiernos de Mesoamérica con relación a REDD

Yvette Aguilar, Asesora del Ministerio de Medio Ambiente en Cambio Climático, El Salvador



Tradicionalmente, las opciones forestales de mitigación, incluyendo las opciones REDD, tienen problemas como la limitada permanencia, las fugas o desplazamiento de emisiones, dificultades para medir los resultados y el impacto adverso en las comunidades de origen, principalmente en cuanto al acceso y uso de los recursos. Con las opciones forestales como REDD existe el peligro de que nuestros países asuman los costos políticos, económicos, sociales, culturales, e incluso ambientales; mientras los países desarrollados cumplen sus compromisos a través de terceros sin disminuir el volumen de sus emisiones.

ESTRATEGIAS nacionales vinculadas a REDD

1. Plan Nacional de Cambio Climático (Art.47c Ley MA).

- Acciones nacionales voluntarias de mitigación (NAMA):
 - Sector energía (transporte, producción energética)
 - Sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y forestal
 - Sector desechos
 - Sector agricultura
- Acciones nacionales de adaptación (PANA):
 - Sector forestal: estrategias de adaptación forestal
 - Otros sectores

2. Estrategia Nacional Forestal.

- Sector forestal productivo
- Conservación de bosques
- Componente nacional de la ERCC

ACCIONES nacionales vinculadas a REDD

1. Acciones de mitigación en el sector forestal:

- Restauración (reforestación) de áreas degradadas y enriquecimiento de bosques secundarios con especies forestales nativas:
 - Establecimiento y manejo de sistemas agroforestales
 - Mejoramiento de bosques energéticos
 - Enriquecimiento de bosques secundarios
 - Restauración de bosques tropicales secos degradados
 - Rehabilitación de suelos degradados
 - Restauración del bosque de manglar

2. Iniciativas de proyectos:

- Iniciativa piloto de REDD (FCPF-BM)
- Componente nacional proyecto regional Corredor Mangle
- Componente nacional proyecto REDD (GTZ)
- Componente nacional proyecto Bosques y Manejo Forestal (FINFOR)

Todas las partes interesadas en REDD — a favor o con reservas— presentaron en abril del presente año sus posiciones oficiales, las cuales fueron incorporadas en el texto de negociación actual. En el caso de la región, Nicaragua presentó una posición oficial común, reforzada en Junio al agregar un texto adicional elaborado por El Salvador, conteniendo seis puntos básicos:

1. Es indispensable enfrentar las causas estructurales y de fondo para poder alcanzar resultados relacionados con la deforestación y degradación.
2. Las acciones REDD deben tener alcance nacional y no sub-nacional, formando parte de los procesos de mitigación, pero en el marco de nuestras prioridades de desarrollo sostenible y complementarias a las medidas de adaptación.
3. El proceso debe tener dos fases: a) hasta el 2012, priorizando la creación de capacidades nacionales para realizar inventarios y la exploración de proyectos pilotos; y b) después del 2012, incorporando recursos para la ejecución de políticas y medidas.

PANEL II: Posiciones, estrategias y acciones de los gobiernos de Mesoamérica con relación a REDD

Diálogo general entre participantes

El tema central que concentró la discusión fue la propiedad del carbono generado en las iniciativas de manejo forestal, a la luz de las dinámicas actuales de los mercados voluntarios y las posibles vinculaciones de las iniciativas REDD a este tipo de mecanismos financieros. Dentro del análisis se incluyeron elementos clave como: los derechos sobre el uso y comercialización de los recursos; las modalidades que pueden existir; la problemática de la tenencia de la tierra; y la importancia de impulsar procesos de consulta que garanticen la participación de los diversos sectores a nivel nacional, incluyendo las comunidades y pueblos indígenas.

La discusión sobre los derechos de propiedad del carbono generalmente se concentra en analizar si el Estado nacional es el dueño, o si por el contrario pertenece a las comunidades responsables de mantener los bosques. Sin embargo, se pierde de vista un actor principal: el país desarrollado que compra los certificados de carbono, quien finalmente se acredita y dispone del recurso, no pudiendo ser tocado por nadie más. Inclusive, si un país tiene un proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio, no puede atribuirse la reducción de emisiones, pues la misma pertenece al comprador, aunque físicamente el carbono no esté localizado en su territorio. Ahora bien, ¿Qué instancia tiene la potestad para vender los certificados y, por lo tanto, recibir los beneficios económicos? ¿El gobierno nacional, o la comunidad debidamente organizada? Las respuestas a estas preguntas deben quedar definidas con claridad dentro de las políticas de cada país. En Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda ya tiene la autorización para la comercialización, mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

La adopción de diferentes modalidades de comercialización representa otro aspecto a ser analizado y definido en cada país. En el caso de Oaxaca (México), donde se participa a través del mercado voluntario de carbono, el contrato especifica que los compradores únicamente están adquiriendo el servicio por un año, lo cual no perjudica en nada la autonomía comunitaria, siendo el único compromiso evitar el cambio de uso del suelo. Algunas modalidades incluyen la creación de fideicomisos, creación de acciones a ser comercializadas en las bolsas de valores, adjudicación de derechos de venta a terceros, entre otras. En el fondo, la cuestión es quién recibe y administra el dinero generado por el carbono. El reto consiste en explorar opciones que permitan una articulación entre las adjudicaciones del Estado y la prestación del servicio por parte de las comunidades, para que al final el beneficio pueda ser compartido. En cuanto a REDD y su posible vinculación con los mercados de carbono, hay que reconocer que aún no hay nada definido a nivel internacional. Inclusive, con la





creación de un fondo internacional como fuente de financiamiento para iniciativas REDD, no existiría la necesidad de acudir a los mercados.

Por su relación con los bosques y los recursos presentes en ellos, la problemática de la tenencia de la tierra adquiere gran importancia y emerge como uno de los problemas estructurales más sensibles en Latinoamérica. En Nicaragua, la discusión se ha centrado en determinar quién tiene los derechos de uso, no solamente de los recursos forestales, sino además de los recursos presentes en el subsuelo —por ejemplo, petróleo— y otros, como el carbono. Dentro del contexto de REDD y las negociaciones actuales, resulta clave unificar criterios y establecer con claridad los planteamientos y propuestas de las comunidades indígenas y multiétnicas.

Con relación a la participación de las comunidades, en Guatemala, actualmente se elabora un proceso de consulta donde se están tomando en cuenta todos los sectores a nivel de propuesta, incluyendo los pueblos indígenas. Según datos del Inventario Nacional Forestal, existe una significativa proporción de bosques comunales y municipales, al igual que tierras del Estado que están directamente relacionados con las comunidades indígenas. Para la construcción de estrategias REDD se deben analizar e incluir dentro del proceso, este tipo de consultas previas, de amplia participación y complejidad.

Las dinámicas actuales indican que los países están en proceso de formular sus políticas respecto a los mercados de carbono. De igual manera, los posibles compradores analizan los mecanismos de adquisición. A pesar de que ya hay compras voluntarias, negociaciones, cartas de intención, e incluso, cuantificación del carbono, no hay compromisos ni garantía, por lo que se requiere un mayor avance en los marcos legales, institucionales y financieros.

PANEL III: Acciones e iniciativas de REDD en Mesoamérica

Greg Frey, Banco Mundial Fondo Cooperativo de Carbono Forestal



El desarrollo de iniciativas orientadas a reducir la deforestación y la degradación son imprescindibles, si se quieren lograr avances en las metas relacionadas con las emisiones y los problemas derivados del cambio climático. Dentro de este contexto, REDD es una alternativa importante, pues debería tener una alta relación costo-beneficio, un impacto inmediato y varios beneficios adicionales como la reducción de vulnerabilidades y la mejora en la calidad de vida de las comunidades. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) surge como una opción creada por el Banco Mundial para fortalecer los mecanismos de financiamiento del carbono forestal.

El FCPF pretende impulsar la cooperación, tanto entre diferentes países como a nivel interno de las sociedades, respondiendo así a dos de los principios básicos de REDD: 1) procesos inclusivos y transparentes, donde participen múltiples actores en la creación de una estrategia; y 2) la contribución de las intervenciones al desarrollo sustentable de cada país. En la actualidad, los recursos del fondo se invierten principalmente en las acciones de capacitación, consulta, análisis y diseño para preparar a los países de cara a futuros mecanismos de financiamiento para implementar estrategias REDD. Existen tres resultados o productos esperados para los países que están participando en el FCPF: a) un escenario de referencia; b) un sistema de medición y verificación nacional; y c) una estrategia REDD a nivel nacional.



Pasos para alcanzar los resultados esperados con el FCPF:

- *Organización*, etapa en la que el gobierno hace una propuesta de cómo garantizará la mayor participación posible de los ciudadanos y sectores de la sociedad civil.
- *Análisis estratégico y multisectorial*, con el propósito de identificar los sectores y actividades que deben involucrarse en el proceso (ej. agricultura, minería, etc.).
- *Proceso de consulta*, con la característica de que es un proceso continuo, donde los sectores involucrados participan en diferentes momentos durante la experiencia.

Una vez finalizado este proceso de consulta y análisis, se está en capacidad de generar un plan para fortalecer el marco de políticas y los marcos legales; lograr una mayor comprensión del marco de la gestión ambiental y social; así como identificar mecanismos que faciliten la integración ciudadana en el futuro proceso de REDD. Existen experiencias exitosas sobre procesos de consulta que, a través de las metodologías y los espacios de participación adecuados, han logrado establecer las bases para futuras iniciativas de REDD.

PANEL III: Acciones e iniciativas de REDD en Mesoamérica

Gabriel Labbate, UNEP-Panamá Programa Colaborativo de las Naciones Unidas sobre REDD

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ejecuta el programa UN-REDD – a través de tres agencias: FAO (agricultura y alimentación), PNUD (desarrollo) y PNUMA (medio ambiente)– y es financiado por una donación del gobierno de Noruega. Nueve países participan del programa, de los cuales Panamá, Bolivia y Paraguay son los representantes de Latinoamérica, aunque se estudia la inclusión de Ecuador y Argentina. UN-REDD apoya, a través de financiamiento, actividades en dos áreas: a) gobernanza de sistemas forestales, lo que incluye capacidad institucional, aspectos legales, tenencia de la tierra, mecanismo de distribución de pagos, entre otros; y b) monitoreo, reporte y verificación.



Al ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos una de las bases del sistema de Naciones Unidas, desde UN-REDD se busca garantizar que los grupos más vulnerables –incluyendo comunidades indígenas– estén incluidos dentro de una estrategia nacional REDD. En el caso específico de los pueblos indígenas, los principios de buena fe y el consentimiento previo, libre e informado son requisitos fundamentales para lograr acuerdos válidos, especialmente cuando las intervenciones implican cambios en aspectos legales y/o administrativos. Ante la complejidad de las estrategias REDD, se ha contemplado un mecanismo para recibir las denuncias de malas prácticas derivadas de las acciones de UN-REDD que afecten negativamente a esos grupos vulnerables y comunidades indígenas.

UN-REDD tiene una junta de gobierno normativa, conformada por los países participantes, donantes y representantes de la sociedad civil y los pueblos indígenas, instancia dentro de la cual las decisiones se toman por consenso. A la vez, el programa recibe asesoría independiente sobre los temas de bosques, derechos y cambio climático, obteniendo insumos para la definición de directrices, principios y formas de actuar. En este sentido, UN-REDD está en un proceso continuo de aprendizaje, por lo que resulta importante escuchar la mayor variedad de opiniones posibles.

Por la manera en que se implementó, a partir de ciertos ajustes que fueron necesarios para corregir errores, el caso de Panamá merece ser considerado como una experiencia positiva. En lugar de elaborar un documento y luego validarlo a través de la consulta, UN-REDD invitó a un grupo de representantes indígenas a participar en la elaboración misma del documento. Lo anterior permitió la identificación de varios aspectos reconocidos como conflictivos dentro de REDD, por ejemplo: ¿Quién finalmente es dueño del carbono? ¿Cómo funciona la estructura de la propiedad de la tierra? ¿Quiénes se vincularán en las iniciativas y quiénes no? ¿De qué manera se trabaja en las zonas indígenas? Ante estas interrogantes, el compromiso ha sido el de continuar las discusiones hasta encontrar los acuerdos que permitan desarrollar el programa.

Finalmente, dentro de UN-REDD creemos firmemente que las intervenciones REDD tienen que hacerse bajo ciertos parámetros básicos de equidad, respeto y ética. Si no es así, ante la falta de garantías de cumplimiento, tanto las demás partes como el propio Sistema de las Naciones Unidas pueden decidir no continuar en el proceso.

PANEL III: Acciones e iniciativas de REDD en Mesoamérica

Charlotte Haeusler, GTZ-El Salvador Programa REDD de GTZ con Centroamérica y República Dominicana



El programa de Reducción de Emisiones Producidas por la Deforestación y la Degradación Forestal en Centroamérica y República Dominicana es una iniciativa REDD de la GTZ, actualmente en proceso de completar su fase de preparación. El cambio de uso del suelo y la exposición a fenómenos naturales, que pueden terminar en desastres, sigue representando un gran problema en la región y son elementos a considerar por cualquier intervención futura de REDD. Además, existe la necesidad de mejorar el diálogo, tanto entre países como a nivel interno de los mismos, asegurando la participación de la sociedad civil y los grupos indígenas. La claridad respecto a la implementación de las acciones vinculadas a REDD representa otro desafío regional. Interrogantes claves deben ser consensuadas, por ejemplo: ¿A quién pertenece el carbono y las reducciones de emisiones?; ¿Cómo integrar REDD a las estrategias regionales y nacionales ya existentes?; ¿Qué tipo de incentivos pueden crearse para quienes han conservado los bosques?; ¿Cómo será posible monitorear los pactos y avances socio-económicos?.

La ejecución del Programa REDD de la GTZ contempla una duración de seis años (dos fases de tres años cada una), iniciando en Enero 2010. La contraparte política estará a cargo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y El Salvador tendrá la sede regional del programa. Se prevé la participación de asesores técnicos en cada país, quienes serán los responsables de los enlaces del programa con los ministerios, la sociedad civil y con otras instancias específicas, como CATHALAC y las diferentes organizaciones pertenecientes a ACICAFOC, entre otros actores a vincular.

El objetivo principal del programa es crear en los países miembros de CCAD las bases adecuadas que les permitan desarrollar mecanismos de compensación sostenibles orientados a la disminución de las emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación forestal. Entre las actividades contempladas se encuentran: consultorías, capacitaciones de profesionales, suministro de equipamiento, apoyos financieros y subsidios para impulsar talleres y proyectos locales. Adicionalmente, se busca fortalecer la posición de los países centroamericanos en las negociaciones internacionales, al tiempo que se apoya el diseño de estrategias nacionales de REDD. El establecimiento de mecanismos justos de compensación e incentivos, así como la inclusión de las comunidades indígenas y las poblaciones locales (ej. pequeños productores y mujeres) se convierten en objetivos específicos a considerar.

El programa tendrá tres componentes: a) diálogo intersectorial y a multinivel, donde se propiciarán mecanismos y espacios de discusión entre todos los sectores relevantes, promoviendo la articulación entre ellos; b) creación de los instrumentos y procedimientos necesarios para la implementación de REDD, tomando en cuenta aquellos grupos más vulnerables; c) capacitación técnica a las instituciones involucradas (ej. elaboración de inventarios de gases, monitoreo en el cambio de uso del suelo, sistemas de información, etc.), para lo cual se aprovechará la vinculación con CATIE y CATHALAC.

PANEL III: Acciones e iniciativas de REDD en Mesoamérica

Arturo Santos, UICN

Acciones sobre REDD de UICN en Mesoamérica

La deforestación y la degradación de los bosques causan aproximadamente entre el 18% y 20% de las emisiones de gases efecto invernadero, según la UNFCCC. Sin embargo, los bosques también tienen capacidad para reducir esas emisiones, capturar y almacenar carbono, al tiempo que pueden reducir la vulnerabilidad de personas y ecosistemas ante el cambio climático. Algunas de las principales medidas a considerar dentro del enfoque global de mitigación y adaptación son: conservación de los bosques y su gestión sostenible; restauración forestal; generación de bioenergía; entre otras. Las experiencias de las comunidades forestales han demostrado la necesidad de un enfoque más integral, tomando en cuenta todos los servicios de los bosques y no únicamente el carbono, a fin de garantizar mejoras en la calidad de vida de los habitantes, aumento de la resiliencia de las comunidades rurales y, en sentido general, procesos de desarrollo sostenible.



Según The Forests Dialogue, los proyectos REDD+ deben demostrar: a) *integridad ecológica*, mejorando los niveles de biodiversidad y otras funciones de los ecosistemas forestales; b) *integridad social*, que implica el reconocimiento, proyección y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales; y c) *integridad atmosférica*, a través de la reducción real de CO₂. En el caso del trabajo de la UICN en la región, las iniciativas se ejecutan en tres niveles: 1) regional, a través del trabajo con las comisiones técnicas de Áreas Protegidas, Bosques y Cambio Climático, enfocado en el desarrollo de políticas y la articulación de los programas; 2) nacional, con autoridades de medio ambiente, sector forestal y áreas protegidas; y 3) sub-nacional, trabajando directamente con organizaciones de base y líderes locales. El trabajo realizado en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá permite presentar los siguientes resultados hasta el momento:

- Restauración de zonas degradadas en lugares claves de interconectividad biológica.
- Disminución de incendios forestales, deforestación, extracción ilegal de madera.
- Mantenimiento de la cobertura y el enriquecimiento del bosque mediante una visión de ordenamiento territorial.
- Fortalecimiento de los procesos de gobernanza, promoviendo la integración multisectorial.
- Integración a procesos internacionales de manejo sostenible de recursos (ej. producción orgánica, comercio justo, entre otros.).

Varias conclusiones pueden señalarse a partir de las experiencias regionales y nacionales, entre ellas: a) la integración de las comunidades a procesos de manejo y adjudicación de recursos que promueve la gobernanza forestal y a la vez garantiza el respeto a los derechos y la sostenibilidad de los procesos REDD+; b) actualmente, las experiencias de manejo forestal comunitario representan la base para las estrategias REDD, para lo cual será necesario la ampliación de los actores vinculados (integración multisectorial); c) el reconocimiento del manejo forestal como una alternativa para la generación de divisas.

PANEL III: Acciones e iniciativas de REDD en Mesoamérica

Nelson Cuéllar, PRISMA

Hacia un Programa REDD que beneficie a comunidades forestales en Mesoamérica



A partir del contexto de emergencia actual de la región respecto al tema REDD, PRISMA junto a las fundaciones FORD y PACKARD realizan un proyecto de investigación sobre la temática, con la característica de estar centrado en las preocupaciones de las comunidades forestales. Actualmente, coexisten en la región una serie de disputas relacionadas con los derechos sobre las tierras forestales, por lo que cualquier iniciativa REDD que se quiera implementar debe considerar esta realidad como una posible fuente de conflicto. Es posible verificar un gran interés en

identificar nuevas maneras de construir institucionalidad en la región, sin embargo, no siempre estas disputas son tomadas en consideración en su justa dimensión.

El proyecto tiene como finalidad la definición de una estrategia para la promoción de iniciativas REDD en Mesoamérica, trascendiendo los objetivos propios de la reducción de emisiones, para lograr mejores condiciones de justicia social en las comunidades forestales indígenas y campesinas. Tres fases se han considerado para su implementación:

Fase 1. *Comprensión del problema a nivel regional*, lo que implicará, entre otros resultados, un mapa actualizado de las dinámicas y los procesos de deforestación y degradación en la región. Además, la investigación buscará identificar y entender las principales iniciativas –políticas, programas– los actores vinculados a ellas, las capacidades de monitoreo y evaluación, y la identificación de zonas y socios potenciales.

El proyecto

Objetivo:

- Definir una estrategia para la promoción de iniciativas REDD en Mesoamérica que puedan tener un impacto transformador en procesos relevantes, que no necesariamente requieran de altas inversiones, pero sí de compromisos sostenibles y estratégicos con el fin de reducir las emisiones de carbono por deforestación y degradación de bosques, que simultáneamente contribuya a la justicia social en comunidades forestales

Fases del proyecto:

- Fase 1: Entendimiento del problema
- Fase 2: Acercamiento a zonas forestales: Análisis de factibilidad
- Fase 3: Desarrollo de la estrategia y plan de acción para promover iniciativas REDD en Mesoamérica

Diseñando un Programa REDD en Mesoamérica

PRISMA

- Negociaciones globales de cambio climático enfocadas en acuerdo post-2012 incluyendo la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), aunque no están claros los impactos para comunidades forestales
- **En Mesoamérica:** Claro y creciente interés por aprovechar las “nuevas oportunidades” de REDD incluyendo gobiernos que han solicitado incorporación de los países a programas de cooperación bajo REDD
- Mesoamérica: Potencial estratégico de aprendizaje para un mejor entendimiento de complejidades derivadas de la implementación de acciones REDD en contextos diferenciados:
 - Situación de derechos sobre las tierras forestales;
 - Viejas y nuevas disputas por los bosques y tierras forestales;
 - Esfuerzos de construcción institucional para la gestión y manejo de bosques en escalas locales, nacionales y regionales

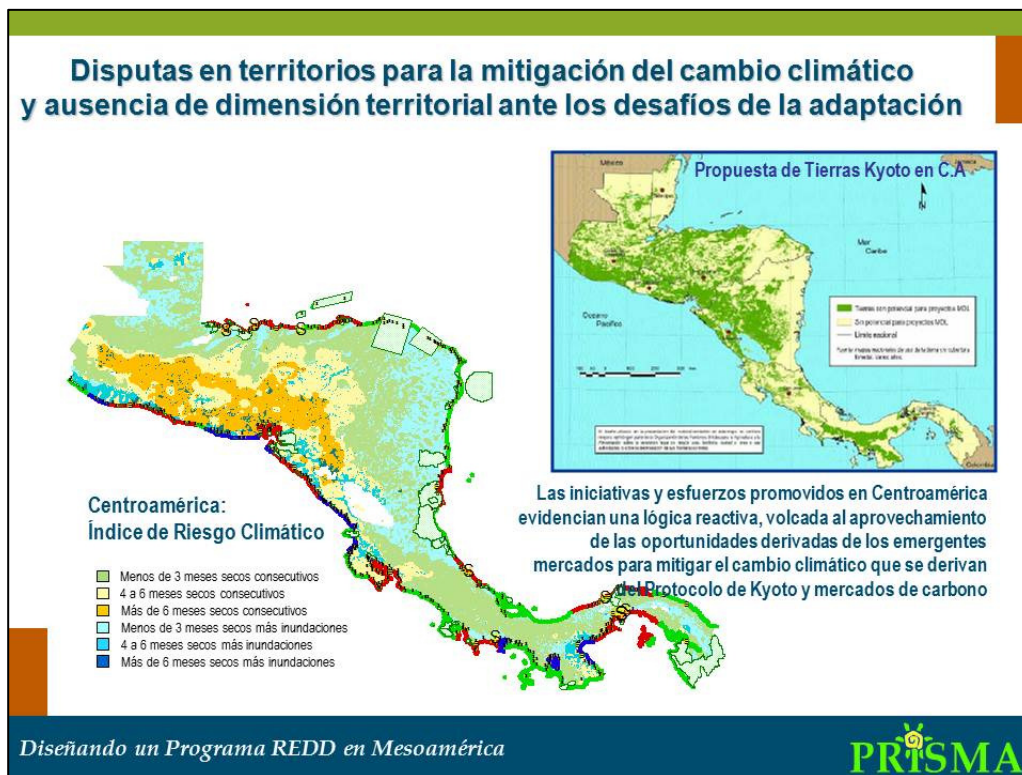
Diseñando un Programa REDD en Mesoamérica

PRISMA

Fase 2. *Profundización del entendimiento de la problemática en territorios específicos*, permitiendo identificar: a) dinámicas de uso de la tierra; b) inventario de recursos para determinar línea base; c) mecanismos e instrumentos para el manejo sostenible de los bosques; d) arreglos institucionales existentes (normas, alianzas); e) posibles impactos sociales de las intervenciones REDD; f) capacidad y posibilidad de incorporar iniciativas REDD, entre otros.

Fase 3. *Desarrollo de una propuesta de programa*, incluyendo una síntesis del mapeo sobre los procesos de tenencia de la tierra en las zonas deforestadas y degradadas; principales fuerzas impulsoras; evaluación del potencial de reducción de emisiones en los países de la región; y posibles impactos sociales.

En sentido general, lo que se pretende es construir una propuesta de programa que identifique socios, posibilidades de colaboración interinstitucional, costos posibles de la implementación en territorios específicos, así como actividades que pueden generar procesos que contribuyan efectivamente a la reducción sostenible de emisiones, sin perder de vista las preocupaciones de justicia social, especialmente desde la perspectiva de las comunidades locales.



PANEL III: Acciones e iniciativas de REDD en Mesoamérica

Diálogo general entre participantes

A pesar de que no es el único camino para enfrentar la problemática del cambio climático, la existencia de oportunidades reales, pero también de amenazas importantes convierte a REDD en un tema que genera las más diversas opiniones encontradas. Si bien para Centroamérica y México, la mitigación no representa el aspecto central, sí existe una necesidad urgente de implementar medidas que contribuyan a la adaptación de la región al cambio climático. Con o sin REDD, nuestros países ya enfrentan situaciones derivadas del cambio climático y se hace necesario comenzar a responderlas.

La mayor parte de la discusión se enfocó en la identificación de los principales retos y condiciones necesarias para la construcción de propuestas propias desde la región, lo que implicaría un rol más activo y protagónico frente a los organismos internacionales y agencias de cooperación. El tema de los mercados de carbono, el reconocimiento del rol de las comunidades forestales y la participación de las comunidades indígenas captaron la atención en el debate, el cual se resume en los siguientes apartados.

Avances y realidades actuales: El reto de construir propuestas desde nuestros territorios

Si bien es cierto, REDD se vincula a la temática forestal y, por lo tanto, a la biodiversidad; la región necesita avanzar en la construcción de su propio enfoque. En la región centroamericana se está discutiendo todavía la Estrategia Regional de Cambio Climático, la cual representa una de las principales urgencias para nuestros países. Además, como parte del contexto sobre biodiversidad, se prepara la segunda fase del Corredor Biológico Mesoamericano, llamado a operar nuevamente como el programa marco de la cooperación regional; utilizando como base la infraestructura natural que tiene la zona para adaptarse al cambio climático. Es necesario destacar que de las 20 millones de hectáreas disponibles, aproximadamente 7 millones se encuentran bajo influencia de las comunidades y pueblos indígenas. La gran cantidad de acciones que se pueden impulsar y el poco tiempo disponible representa un gran desafío e impulsa la definición de prioridades, ritmos de trabajo y estrategias de incidencia política, considerando los derechos de las comunidades uno de los temas centrales.

Hace varios años con la aparición del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) –al igual que pasa actualmente con REDD– se generó todo un movimiento alrededor del tema. Se participó en la celebración de talleres, la definición de posibles estrategias y el establecimiento de términos de referencia, aunque al final las condiciones y las reglas ya venían establecidas desde fuera. A pesar del limitado impacto de estos mecanismos, los grupos comunitarios siguieron haciendo sus actividades de manejo local de los bosques. La organización social de las comunidades forestales de Totonicapán en Guatemala, y el Programa Campesino a Campesino (PCaC) son muestras de que las dinámicas territoriales continuaron con o sin MDL, así como continuarán con o sin REDD. Es momento de aprovechar toda la experiencia acumulada en la región y las lecciones aprendidas para generar propuestas desde nuestras realidades, fortaleciendo las posiciones en las negociaciones. Si mecanismos como las estrategias REDD se logran articular a las propuestas de desarrollo local de los territorios, su implementación puede aportar en la construcción de verdaderos procesos de desarrollo. En caso contrario, se debe buscar y generar nuevas soluciones para nuestros problemas.

El programa estratégico de la región está basado en una nueva visión multifuncional de los bosques. El manejo de los ecosistemas forestales coloca a la especie humana como parte fundamental y representa una fortaleza que debe ser aprovechada para promover esa visión frente a organismos internacionales y agencias de cooperación. Por supuesto, todavía es mucho lo que se debe avanzar en los ámbitos político e institucional; privilegiando nuevos paradigmas en lo político y la intersectorialidad en el plano técnico, evitando las prácticas actuales caracterizadas por la falta de coordinación y los esfuerzos dispersos. Independientemente de la aprobación o no de nuestras propuestas, se debe de avanzar en fortalecer las organizaciones y su accionar en los territorios, garantizando cambios y nuevos acuerdos en el marco legal e institucional.

En el plano de la agenda política ambiental, a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), los países han aprobado un nuevo Plan Ambiental para la Región Centroamericana –con vigencia del 2010 al 2014– dentro del cual se consideran como objetivos estratégicos promover la coherencia entre las políticas y fortalecer la gobernabilidad de los ecosistemas forestales. Precisamente, este nuevo plan representa un esfuerzo de trabajar más horizontalmente, lo que implica un cambio en la manera tradicional de abordar las problemáticas ambientales en la región. La formulación de una nueva Estrategia Regional de Gobernanza Forestal es uno de los resultados esperados, para lo cual será necesario vincular el Plan con las iniciativas existentes en los territorios. Estos instrumentos contribuirán a mejorar la posición de los países frente a los posibles donantes, al servir como plataforma para tener mayor claridad hacia dónde se deben destinar los recursos de inversión.

La integración de la sociedad civil con las políticas y estrategias que se diseñan en la región constituye otro de los requisitos esenciales para la construcción de propuestas propias, para lo cual se requiere una reflexión respecto a los espacios de participación ciudadana y los procesos de elaboración de las políticas públicas. La articulación de los ámbitos público y privado e inclusive entre entes públicos también, se convierte en un desafío ante las débiles plataformas de comunicación con las que cuentan los ministerios de medio ambiente para interactuar con la sociedad. Actualmente, existen esfuerzos desde los gobiernos centrales por construir estrategias a nivel nacional, crear sistemas de monitoreo y mecanismos de seguimiento; sin embargo, no está clara la participación de la sociedad en esos procesos. El acceso a la información es otro elemento clave para impulsar la integración multisectorial alrededor de las políticas nacionales y regionales. A pesar de que la información existe, se destaca la ausencia de un sistema transparente que permita el acceso público a la misma, evitando así el desencadenamiento de mayores procesos de discusión y análisis, capaces de potenciar los resultados alcanzados a través de las diferentes intervenciones territoriales.

Analizando las tendencias: De la prisa actual al pensamiento estratégico a largo plazo

La pérdida de la perspectiva estratégica a mediano y largo plazo es uno de los peligros derivados de la concentración actual en propuestas REDD de corto plazo. Sin embargo, el énfasis para las comunidades forestales localizadas en territorios rurales debe estar enfocado, entre otros aspectos, en consolidar sus derechos de propiedad, uso y acceso de los recursos, con una mirada puesta en la adaptación, al tiempo que se protege la subsistencia. Analizar con profundidad la realidad actual permitirá la priorización de los esfuerzos por parte de todos los actores involucrados (gobiernos, organismos internacionales, ONGs, líderes locales, etc.), así como el mejor aprovechamiento de las estrategias REDD para abordar las problemáticas relacionadas con el cambio climático.



Aparentemente, las tendencias apuntan hacia un reforzamiento del tema de la preservación (asociadas al concepto de “bosque natural”) y un fuerte sesgo hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, en el primer caso, las iniciativas de REDD pueden aprovecharse para abordar –de manera más explícita– las disyuntivas propias del uso y manejo de los recursos naturales; mientras que, si bien es cierto resulta importante garantizar la participación y beneficio de las comunidades indígenas por encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad, es importante considerar además otras poblaciones que habitan en las áreas más secas, con graves problemas de degradación (costa del Pacífico en Costa Rica, por ejemplo). Aspectos como el fortalecimiento de la gobernabilidad y las capacidades de negociación por parte de los actores locales son problemáticas en las que debe avanzar la región, independientemente de la implementación o no de estrategias REDD.

Los mercados de carbono: ¿Ir hacia ellos o evitarlos?

Uno de los supuestos más aceptados consiste en asumir que las intervenciones REDD estarán ligadas automáticamente a los mercados de carbono. La desinformación sobre el tema, al inicio de las discusiones, se convirtió en obstáculo para la exploración de otras alternativas; realidad que está cambiando en la actualidad como resultado de los años de debate y de las lecciones aprendidas. Experiencias negativas como las de Indonesia –donde las corporaciones luchan por ingresar al negocio del carbono, despojando de sus tierras a las comunidades indígenas y rurales– evidencian las limitaciones y problemas de los mercados de carbono

ante la compleja realidad socio-económica de los países en vías de desarrollo.

El enfoque centrado en los mercados ha significado inversiones considerables en tiempo y recursos para la creación de indicadores, capacidades de monitoreo, verificación y reportes sobre inventarios de carbono. Estos esfuerzos podrían haberse orientado hacia otras actividades, por ejemplo: comprensión de las dinámicas de los ecosistemas forestales, fortalecimiento de las capacidades nacionales para inventarios de biodiversidad o creación de estrategias de adaptación ante el cambio climático. En lugar de concentrar recursos y prioridades en la preparación de los países para su vinculación a los mercados de carbono, se podría avanzar significativamente en la construcción de estrategias de adaptación para los diferentes ecosistemas forestales de la región. En este sentido, la creación de un fondo REDD, bajo las directrices de la Convención, es la propuesta de algunos de los países de nuestra región.

En algunas ocasiones, las discusiones sobre REDD tienden a concentrarse en el tema del carbono, dejando en un segundo plano los demás beneficios relacionados con el manejo sostenible de los bosques. Resulta importante evidenciar el valor de los ecosistemas forestales, tanto para los diversos grupos que interactúan directamente con los mismos (comunidades indígenas, rurales, agricultores, etc.) como para toda la sociedad.

Rol de las comunidades forestales: Del reconocimiento a la compensación

El manejo sostenible de los recursos naturales es una actividad que las comunidades rurales han venido haciendo desde hace años sin recibir, en la gran mayoría de los casos, ni reconocimiento ni compensaciones por esa importante labor. Recientemente se ha comenzado a avanzar en este aspecto, inclusive antes de toda la discusión de REDD. Por ejemplo, las comunidades de Petén llevan tres años y medio luchando por que se reconozcan los aportes del manejo forestal campesino, a partir de las acciones que ellos realizan: planes de manejo, recuperación de sitios degradados, brechas contra fuegos, minimización de riesgos, entre otras.

De igual manera, en la zona de Lachuá conviven 55 comunidades, quienes reclaman derechos sobre los múltiples beneficios generados por el área protegida bajo su responsabilidad y manejo; al tiempo que buscan evidenciar las repercusiones de las modalidades de conservación en sus realidades sociales y económicas. Las presiones se trasladan cada vez más hacia las dinámicas en el uso de la tierra, donde el factor rentabilidad cobra especial importancia. Ante el avance de tendencias como el turismo, la expansión agrícola o los biocombustibles; el reconocimiento económico a la preservación y a las actividades comunitarias puede servir de estímulo para resistir esas presiones. Dentro de este contexto, la creación de una plataforma que permita articular las realidades que existen en el campo, con lo negociado en las políticas nacionales y regionales, se convierte en un objetivo fundamental dentro de todos estos esfuerzos.

*Construyendo una posición desde la perspectiva de los pueblos indígenas: Desafíos y realidades*

Dentro de los territorios indígenas, el tema REDD está aún sin explorar. Esta realidad contrasta con el nivel de conocimiento y el avance en las negociaciones verificables entre diferentes instancias (por ejemplo, gobiernos y agencias de cooperación). En el caso de Costa Rica, el convenio 169 de la OIT está en vigencia; especificando en su artículo seis que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre cualquier iniciativa administrativa que los vaya a afectar. Esto aplica tanto para gobiernos nacionales como para los demás actores. ¿Se han realizado las debidas consultas en los pueblos indígenas sobre los procesos REDD?; y si fuera el caso, ¿Han emitido su criterio y valoraciones esas comunidades?

En el caso específico de Panamá, existen proyectos en ejecución financiados por agencias y organismos internacionales que incluyen proyectos de MDL, Pagos por Servicios Ambientales (PSA), reformas legislativas, entre otros. El tema de la propiedad del carbono está en discusión y no existe un consenso sobre la manera de abordarlo a través de una reforma legislativa a la Ley Forestal. Sin embargo, para las comunidades indígenas más allá del carbono, sus inventarios y precios, lo que está en juego es la seguridad de la población y el respeto a sus derechos. ¿Quién garantiza que de un momento a otro, por las presiones del mercado, no se modifique la organización administrativa y se cambien las comarcas actuales por provincias? Desde la perspectiva de las comunidades indígenas,

la seguridad territorial está por encima de cualquier valor monetario que el mercado asigne al carbono, pues éste no representa el valor real de los bosques. El aire, la posibilidad de obtener plantas medicinales y la biodiversidad son algunos de los beneficios considerados por los pueblos indígenas, dentro de una visión que, además, prioriza la conservación de los ecosistemas forestales en función de las generaciones actuales y futuras.

A nivel internacional se manejan opciones en las que REDD puede hacer daño a las comunidades indígenas y campesinas o bien podría ser neutral; e incluso hasta apoyar sus procesos de desarrollo. Un aspecto clave en todo esto es la capacidad de respuesta de las comunidades mismas, a través de cuatro escenarios posibles:

- 1) Prepararse para defender, protestar y evitar los daños que podrían venir.
- 2) Asumir una posición neutral, es decir, no participar en las discusiones.
- 3) Elaborar propuestas de intervención utilizando la plataforma REDD.
- 4) Construir propuestas alternativas desde las comunidades que aborden las problemáticas de los derechos y el cambio climático.

Financiamiento para las iniciativas REDD: ¿Para qué?, ¿para quién?

La preparación para la futura competencia por el acceso a los recursos financieros que estarán disponibles para el tema REDD aparece como un aspecto común entre la gran cantidad de iniciativas actuales. Los recursos aportados por el gobierno de Noruega y el Banco Mundial superan los tres mil millones de dólares, sin embargo poco o nada está llegando a la región (Centroamérica y México) por lo que surgen algunas interrogantes: ¿tiene sentido tratar de entrar en esa dinámica? o, en caso contrario, ¿tiene sentido quedarse fuera y decir que no nos interesa? Sin lugar a dudas es una cuestión a discutir más profundamente, tanto a nivel interno de los países, como a nivel regional. Ahora bien, el alcance de REDD no se limita exclusivamente a la disponibilidad de recursos económicos. Más allá, podría estar en juego el tema de los derechos de acceso, los medios de vida de las comunidades rurales y la configuración misma de los territorios. La contribución o no de REDD al fortalecimiento de esos derechos y los beneficios que podría generar, desde la perspectiva de las comunidades relacionadas directamente con los ecosistemas forestales, son elementos que merecen especial atención al momento de evaluar las iniciativas.

CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

Carlos Marcelino, Servicios Ambientales de Oaxaca, México

La experiencia de Oaxaca en la venta de bonos de carbono en el mercado voluntario se realiza a través de Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO), una asociación civil sin fines de lucro conformada por cuatro organizaciones y dos comunidades de la región. Inicialmente, se tenía prevista la idea de ofertar servicios ecosistémicos por captura de carbono en el mercado internacional, sin embargo, esto no fue posible ante la gran cantidad de problemas, trabas, altos costos de transacción y la no aplicabilidad de las tierras a los criterios del MDL. En cualquier proyecto, especialmente los de este tipo, las acciones de concientización y socialización juegan un papel importante, así como la generación de capacidades locales y la integración de socios estratégicos. Precisamente, en los primeros años del proyecto (2004-2008), la Fundación Ford, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Fundación Interamericana apoyaron la iniciativa con asistencia técnica y financiera.



Mercado voluntario de carbono.

Bases Sociales:

- Socialización de la información en todos los sectores involucrados en el proyecto.
- Mayor participación de mujeres.
- Monitoreo interno y externo.
- Fortalecimiento de capacidades locales.

Mercado voluntario de carbono.

Bases técnicas:

- Actualización de la línea base y la adicionalidad.
- Mejoramiento del Sistema de Control Interno y del Sistema de Información Geográfica.
- Diseño de fichas técnicas.
- Parcelas de monitoreo permanente.
- Se realizó el inventario forestal en cada una de las comunidades que participan en el proyecto.
- Se establecieron 31 parcelas de monitoreo permanentes.
- Se corrigieron los polígonos de cada una de las áreas comunitarias.
- Se generó la cartografía comunitaria.

29/03/2008

La actualización de la línea base y la realización de un estudio de mercado para la identificación de posibles compradores fueron las dos primeras actividades realizadas con el propósito de acercarse al mercado. A través de Pro-Natura —una de las organizaciones vinculadas a estos esfuerzos— se logró contactar a la Fundación Televisa y a la empresa farmacéutica Chinoin, quienes estaban interesados en neutralizar sus emisiones de manera coordinada. Durante el 2009 se ha sumado a la iniciativa Gamesa, una industria dedicada a la producción de galletas, la cual se convierte en el mayor comprador con 13,438 toneladas de CO₂ a un precio base de US\$ 10.00 cada tonelada.

La actualización de la línea base y la realización de un estudio de mercado para la identificación de posibles compradores fueron las dos primeras actividades realizadas con el propósito de acercarse al mercado. A través de Pro-Natura —una de las organizaciones vinculadas a estos esfuerzos— se logró contactar a la Fundación Televisa y a la empresa farmacéutica Chinoin, quienes estaban interesados en neutralizar sus emisiones de manera coordinada. Durante el 2009 se ha sumado a la iniciativa Gamesa, una industria dedicada a la producción de galletas, la cual se convierte en el mayor comprador con 13,438 toneladas de CO₂ a un precio base de US\$ 10.00 cada tonelada.

Mercado voluntario de carbono.

Actividades adicionales:

- Reforestación.
- Mantenimiento.
- Enriquecimiento de cafetales.
- Restauración.

Actividades complementarias:

- Conservación y restauración de suelos.
- Conservación y mejoramiento de la biodiversidad.
- Rescate de especies de flora y fauna endémicas.
- Aprovechamiento sustentable de PFNM.
- Restauración de microcuencas comunitarias.

La organización social y la transparencia son dos de los principios más importantes del proyecto. Las comunidades participantes tienen planes de ordenamiento territorial; al tiempo que manejan toda la información relacionada a la comercialización (cantidad, precio de venta, comprador, condiciones, etc.). Con lo anterior se logra implementar un esquema de transparencia acreedor de prestigio a nivel nacional. El apoyo institucional ha significado otro elemento clave para el éxito de la experiencia, pues CONAFOR es la instancia que firma y garantiza los certificados, los cuales tienen una duración de un año por lo que el compromiso es básicamente a corto plazo.

LECCIONES

- No podemos sustentar el pago de servicios ambientales en la idea de “no tocar”.
- La prestación de servicios ambientales implica el manejo territorial y por tanto la creación de arreglos institucionales intra e intercomunitarios.
- Los ingresos obtenidos por la venta de los bonos de carbono, deben de ser el detonante de otros servicios ecosistémicos.
- El pago por servicios ecosistémicos, es un proceso, lento, largo y complejo; sin embargo, aunque el camino sea largo, hay que recorrerlo.

En el 2008 se vendieron 16,412 toneladas, generando ingresos por US\$ 164,120.00, de los cuales el 80% va directamente a las comunidades, mientras que el restante 20% se divide en partes iguales para ProNatura y la SAO y se destina a las actividades de promoción y seguimiento. La experiencia de Oaxaca se basa en la planeación participativa, las actividades técnicas (capacitación, seguimiento, verificación, monitoreo) y en la inclusión de las mu-

La experiencia de Oaxaca se basa en la planeación participativa, las actividades técnicas (capacitación, seguimiento, verificación, monitoreo) y en la inclusión de las mujeres en el proyecto. El mercado voluntario de carbono no es una solución en sí mismo, sino que debe servir de elemento detonador de otras actividades comunitarias, como el mantenimiento de áreas forestadas, restauración de suelos y la conservación de la biodiversidad, entre otras; considerando, además, que la prestación de esos servicios ambientales implica manejo territorial y la creación de arreglos intra e inter comunidades. La lección es que esto es un proceso lento, largo y complejo, pero vale la pena recorrer el camino.

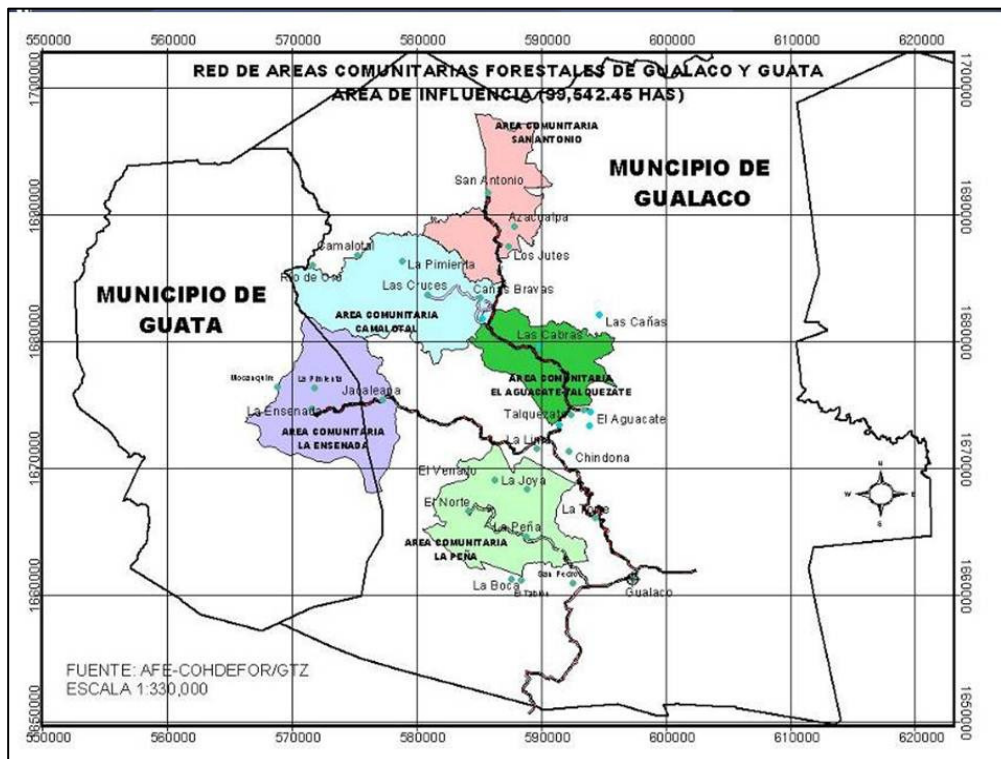
CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

Eduardo Sarmiento, ACOFOG-Gualaco y Guata, Honduras

El proceso de organización de las comunidades en la zona de Gualaco y Guata (Honduras) se inició en el 2004. Luego de dos años de trabajo, en octubre del 2006, solicitamos al gobierno la asignación de 39,542 hectáreas a 39 comunidades mediante un contrato de manejo forestal, lo cual fue aprobado. Junto a esas comunidades, cinco consejos de Patronato y cinco cooperativas agroforestales conformaron la Red de Áreas Comunitarias Forestales de Gualaco y Guata (ACOFOGG), instancia afiliada a la Federación de Productores Agroforestales de Honduras y a la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC).



¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos hasta el momento? Con relación al manejo de los bosques, hemos logrado controlar los cortes ilegales, a través de la protección del entorno por parte de cada comunidad, evitando estos problemas. Además, las áreas afectadas por los incendios forestales representan menos del 1.5% de la cobertura total del bosque, aspecto que refleja una mayor concientización por parte de las comunidades. Actualmente, todas las personas se consideran vigilantes, cuidadores y protectores del bosque. La regeneración de áreas donde no es posible que ocurra este fenómeno de manera natural ha permitido la recuperación de más de 1,500 hectáreas con la utilización de 200,000 plantas de pino producidas. Con relación



al desarrollo comunitario, a través de un financiamiento entre la cooperación alemana y fondos locales propios, se han logrado instalar aproximadamente 400 sistemas de iluminación solar, beneficiando a las comunidades más apartadas del bosque. La rehabilitación de sistemas de agua potable y la rehabilitación de caminos son ejemplos de otras inversiones realizadas en la región.

La tenencia de la tierra en Honduras, particularmente en Olancho, es una realidad bien compleja debido a la existencia de muchos títulos supletorios en la parte correspondiente a las áreas comunitarias, aunque hay que destacar la voluntad del gobierno para ir regulando este aspecto. Como ejemplo de lo anterior, la obtención del título del área comunitaria de las comunidades La Peña, Camalotal, San Antonio, El Aguacate y La Ensenada sólo fue posible luego de anular los títulos privados emitidos irregularmente.

El Plan Comunitario de Gestión Territorial es uno de los instrumentos con los que contamos, desde el 2008, para administrar con mayor eficiencia el territorio. La sinergia creada entre las organizaciones locales (patronatos, cooperativas), las instancias del gobierno con las que se trabaja (Instituto de Conservación Forestal, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, entre otras) y otras instituciones (por ejemplo, la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, organizaciones del sector privado, ONGs y agencias de cooperación internacional); es un aspecto fundamental para lograr los avances alcanzados con el modelo de manejo agroforestal comunitario en Gualaco y Guata.

¿Qué se ha logrado?

En el Manejo del Bosque
50% de los Ingresos Cooperativas

- Cortes ilegales reducidos a 0
- Menos de 1.5% del área afectada por incendios
- Más de 1,500 Has con regeneración establecida
- Más de 200,000 Plantas de pino producidas
- Más de 500 Has reforestadas
- Planes Operativos Auditados y Finiquitados Positivamente
- Más de 100 Km de ronda construidos
- Mas de 200 Has tratadas con quemas Controladas y Prescritas

En el Desarrollo Comunitario
50% de los Ingresos Consejo de Patronatos

- Mas de 400 Sistemas de Iluminación Solar cofinanciados
- 2 Proyectos de Ampliación de Red de la ENEE en ejecución
- Todos los Sistemas de Conducción de Agua Rehabilitados
- Centros Comunales e Iglesias construidos
- Más de 60 Km de Caminos rehabilitados
- Baños, Letrinas Lavables y Pilas Construidas
- Mas de 7,000 empleos generados (más del 60% jóvenes y mujeres)

CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

Leovigildo Doviaza, Cacique y Fiscal de COONAPIP, Panamá



Los territorios que actualmente ocupan los pueblos indígenas en Panamá se han logrado luego de largos y complejos procesos de lucha entre nuestras comunidades y los gobiernos de turno, quienes no estaban dispuestos a reconocer los derechos a la tierra. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) es la instancia gubernamental encargada de promover la creación de las áreas protegidas, algunas de ellas creadas recientemente, están afectando a los pueblos indígenas que han vivido desde siempre en esas zonas. Con frecuencia se utiliza el argumento de que no habrá mayores problemas para cazar, pescar, tumbiar y realizar actividades de sobrevivencia en los territorios; sin embargo, una vez creadas las áreas protegidas llegan las limitaciones, como la Ley Cinco de Prohibición para el Parque Nacional Darién, una ley que se ha denominado la “Ley de la muerte”, por atentar contra los medios de vida tradicionales de nuestras comunidades.

Los procesos de consulta a las comunidades indígenas, frecuentemente, sólo existen en los documentos técnicos. Cuando se nos convocó a conocer sobre REDD, la ANAM ya venía con un documento elaborado con la intención de validarlo. La reacción de los representantes indígenas fue de asombro por no conocer el contenido de la propuesta, al tiempo de exigir las explicaciones del caso. Luego publicaron las fotos de la actividad como si la validación existió. Por situaciones como ésta, los pueblos indígenas tienen desconfianza cuando se les presentan programas y proyectos de este tipo, e inclusive hasta los gobiernos proponen proyectos a nombre de las comunidades indígenas para que luego los fondos no lleguen a su destino en la manera como fueron aprobados.

La presión de REDD sobre las comunidades indígenas proviene de la naturaleza misma de estas intervenciones al estar enfocadas en los bosques. Pocos territorios tienen más capacidad forestal que los territorios ocupados por nuestros pueblos. De ahí la importancia de trasladar todo este conocimiento, así como los posibles beneficios e impactos negativos a las propias comunidades locales. Contrario a lo que se ha afirmado, en Panamá, los pueblos indígenas no hemos aprobado REDD todavía, pues actualmente se trabaja en el proceso de consulta con la población, con participación del Banco Mundial. En este sentido, nuestra propuesta está basada en el enfoque de seguridad territorial.

Con el paso de Panamá al grupo de países de renta media, las agencias de cooperación internacional limitan sus inversiones en proyectos para enfrentar la pobreza. Ahora bien, una visita a los territorios indígenas es suficiente para constatar las condiciones de pobreza en las que viven esas comunidades. Igualmente, se solicitan fondos en nombre de los pueblos indígenas y en ocasiones no estamos enterados de esos manejos. El reto consiste en fortalecer nuestras posiciones, aumentando los espacios de consulta y participación, para así poder tener una visión más clara de qué, para qué y con quiénes estamos negociando.

CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

Yanel Venado, Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá, COONAPIP



La Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá reúne a siete estructuras tradicionales (Ngöbe, Buglé, Bribri, Nazo, Wounaan, Emberá y Kuna), de las cuales cinco son comarcas indígenas creadas por diferentes leyes, mientras que dos están en proceso de creación. Las comarcas son tierras o una circunscripción territorial específica que le pertenece legalmente a las comunidades indígenas. Existe una comunidad indígena (Pucuru y Paya) localizada en la frontera con Colombia que se encuentra conviviendo dentro de un área protegida, con todas las implicaciones propias de un caso así y los conflictos existentes con las instancias nacionales por el acceso a los recursos naturales.

Dentro de la Coordinadora existe una línea académica-técnica de apoyo a los Caciques y correspondió a esta instancia la definición de REDD. Una de las conclusiones es que REDD se trata inicialmente de una alternativa de los países industrializados; sin embargo, para las comunidades indígenas de Panamá, REDD se debe entender como autonomía, sostenibilidad, equidad, igualdad, territorialidad y población. Con la intervención del PNUD y el Banco Mundial –entre otras agencias internacionales– fue posible contar con apoyo para el fortalecimiento institucional de las estructuras organizativas. La explicación que recibieron las comunidades indígenas sobre REDD señalaba dos fases principales: una de preparación (2009-2012); y a partir del 2012 una fase de implementación; con la creación de capacidades técnicas, establecimiento de niveles

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

- Preservación de la Biodiversidad
- Control y manejo de Bosques
- Propiedad del Carbono
- Seguridad jurídica de la tierra
- Conservación de la cubierta forestal

de coordinación institucional, elaboración de un marco legal, realización de acuerdos sobre los mecanismos relacionados con la distribución de beneficios; así como la implementación de los procesos de consulta a los pueblos indígenas.

El objetivo central de las recientes conversaciones en Barcelona era avanzar en la elaboración de textos de trabajos que sirvieran de base sólida para lograr éxito en el encuentro de Copenhague. Sin embargo, los temas que captaron la atención fueron la reducción de emisiones por deforestación en países en desarrollo y los mecanismos para desembolsar fondos en esa dirección. Ante este panorama, los pueblos indígenas de Panamá nos estamos preparando en dos niveles: 1) *técnico*, participando con la Agencia de las Naciones Unidas en un proceso de diálogo; y 2) *comunitario*, llevando la información de REDD a los diferentes pueblos indígenas. Han existido intentos por parte de organizaciones internacionales de ofrecer programas REDD a las comunidades Ngöbes, sin consultar a la ANAM o a la Coordinadora, lo que resultaría en un fracaso de los proyectos impulsados de esta manera.

En el contexto actual, el carbono se ha convertido en el producto “estrella” del bosque, con alto valor para muchas industrias y países dispuestos a pagar por este recurso. Para las comunidades y pueblos indígenas tan importante es el carbono como los demás elementos involucrados a REDD: preservación de la biodiversidad, control y manejo de bosques, seguridad jurídica de la tierra, entre otros.

El asunto...

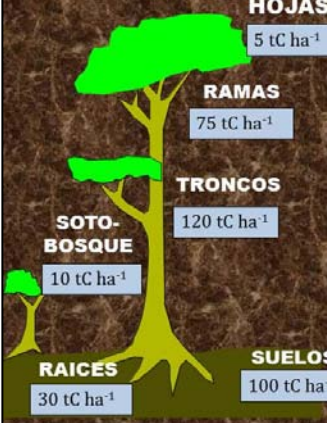
AUTONOMÍA
SOSTENIBILIDAD
EQUIDAD
IGUALDAD
TERRITORIALIDAD
POBLACIÓN

➔

El carbono del bosque tiene valor. Muchas industrias y países están dispuestos a pagar por ello. Sin embargo, guardar el carbono viene con un costo.

- ¿Es un acuerdo justo?
- ¿Vendemos nuestro carbono, pero estamos dispuestos a aceptar la oferta?
- Con la venta, se prohíbe desarrollar los recursos forestales nacionales: ¿Cómo van a compensarnos por los beneficios económicos ahora prohibidos?

BOSQUE EN VENTA



¿ESTAMOS PREPARADOS?

REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:

- * Reformas Agrarias
- * Cambios Legislativos
- * Reformas Institucionales
- * Bosques Genéticamente Modificados
- * Cooperación Tecnológica

Además implicaría:

- * Investigación
- * Desarrollo
- * Despliegue
- * Difusión
- * Transferencia

CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

Aurelia Patterson, Vice-Alcaldesa de Rosita, Región Autónoma del Atlántico Norte, Nicaragua



La costa caribe de Nicaragua es una región con una marcada diversidad étnica, con presencia de seis grupos indígenas: Sumos, Mayagnas, Misquitos, Ramma, Ulguas y Garífunas. Tenemos una región autónoma que cuenta con su gobierno, con varias leyes actuando como el marco legal que da sustento a la estructura político-administrativa. Los avances, en cuanto a la autonomía, no han sido fáciles; ha costado mucho sacrificio e incluso la sangre de nuestros pueblos. Aunque este marco legal no es el más adecuado y completo, según nuestras aspiraciones, peor sería no tener nada. Defender esta autonomía y lograr profundizar en esas iniciativas de manera colectiva, constituyen dos tareas que se están impulsando en estos momentos.

Los pueblos indígenas somos los más ricos porque tenemos recursos dejados por Dios en nuestros territorios: la naturaleza, el agua, la tierra, las especies animales, las plantas. Todos estos recursos forman parte del entorno de las comunidades indígenas. Sin embargo, con la finalidad de separarnos de ellos, nuestros pueblos han sido lastimados, como si no fuera suficiente con las amenazas de la naturaleza (ej. huracanes) o los conflictos sociales como la guerra. Muchos organismos internacionales conocen mejor la situación de la costa nicaragüense que los mismos habitantes de la zona. Gracias a ese conocimiento externo fue posible obtener las 1,638,000 hectáreas que conforman la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS.

En la actualidad, se reciben los títulos de las demarcaciones territoriales en los que se especifica la condición de “administración conjunta”, representando una limitación para impulsar el tipo de desarrollo deseado por nuestros pueblos. Si bien es cierto existen muchos recursos en los territorios indígenas, son otros quienes los aprovechan mejor y se benefician de ellos. Si se destinaran inversiones mayores a impulsar procesos de desarrollo reales en nuestros territorios, otra sería la realidad. Los pueblos indígenas no sólo han sido marginados, sino excluidos al planificar y ejecutar las intervenciones llamadas a generar condiciones favorables para el desarrollo nacional.

Las alianzas tanto a nivel interno como con otros actores, es una condición esencial para que las comunidades indígenas logren salir adelante. La transparencia y las buenas intenciones deben ser requisitos de esos procesos de alianza, en tanto nuestros pueblos están dispuestos a compartir, pero en una relación de igualdad. El gobierno también debe formar parte de estos acuerdos para impulsar entre todos la generación de mejores condiciones de equidad y justicia social. La participación de los pueblos indígenas se garantiza por medio de procesos efectivos de consulta, creando espacios para su integración desde el momento mismo del diseño de las iniciativas. Si somos dueños del bosque y no se nos toma en cuenta, las intervenciones no podrán lograr los resultados deseados.

CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

Marcedonio Cortave, ACOFOP, Petén, Guatemala



La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) está conformada por 23 organizaciones que hacen manejo forestal bajo el sistema de concesiones forestales comunitarias en la zona norte de Guatemala, especialmente dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Nuestro punto de partida es que las comunidades han trabajado el tema forestal durante años y, como resultado de esto, se ha generado la conservación del bosque. Uno de los principios de la asociación es que la gente va a cuidar el bosque en la medida en que éste represente un beneficio, y se ha podido comprobar que la pérdida de bosques es mayor en los casos donde no existen comunidades vinculadas a su mantenimiento. Inicialmente, el enfoque se centró en la conservación de la Reserva de la Biosfera Maya, por lo que las actividades realizadas son esencialmente planes de manejo a largo plazo, de bajo impacto.

El mantenimiento del bosque tiene un costo para las comunidades, en función de todas las actividades que se deben cumplir para su preservación –por ejemplo: control y vigilancia– prevención y combate de incendios. El reconocimiento de estos fue el planteamiento inicial para solicitar que las comunidades recibieran una compensación por el trabajo que realizan. A partir de ahí comenzó la búsqueda de opciones para identificar esos mecanismos y alternativas de financiamiento. Las gestiones iniciaron con sectores gubernamentales con el propósito de comprender mejor los aspectos técnicos e ir promocionando el proyecto en el mercado, lo que implicó la apertura de un fideicomiso formado con aportes propios de las organizaciones de ACOFOP. No obstante, con el cambio de gobierno y las nuevas autoridades fue necesario comenzar de nuevo el proceso, perdiéndose los avances logrados hasta ese momento; principalmente en cuanto a los derechos de propiedad del carbono. Esto ocurrió a pesar de que ya había un convenio firmado por el Presidente y el Vice-Presidente como testigos de honor y se contaba con ofrecimientos de compras adelantadas, aún sin tener los datos específicos de la cobertura real.

El proceso de incidencia política con el gobierno actual ha sido complejo, en tanto que se dificulta la comprensión del enfoque bajo el cual trabajamos, al confundir nuestra propuesta de deforestación evitada como un mecanismo de disminuir la emisión de gases efecto invernadero, con la captación de carbono para fines comerciales. Este proceso ha dejado una serie de lecciones, entre ellas: a) la generación de expectativas muy altas y a corto plazo no consideró los problemas encontrados al tratar el tema de las concesiones; b) las dificultades para poder entender el tema en los diferentes niveles e instancias gubernamentales complicó el proceso de implementación; c) evitar el peligro de distraerse con la ilusión del tema, perdiendo de vista otros procesos locales; d) la importancia de tener claridad al negociar, logrando acuerdos que aseguren continuidad. En la actualidad, tenemos avances significativos en los aspectos técnicos, administrativos y financieros; sin embargo, persisten aún ciertas dificultades a nivel interno, en las instancias nacionales. Ojala puedan superarse esos obstáculos en el presente período de gobierno.

CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

Diálogo general entre participantes



La voluntad política, los sistemas de propiedad de la tierra, la institucionalidad y la participación de las comunidades indígenas en las iniciativas forestales e intervenciones de REDD, resultaron ser los principales temas abordados en el diálogo del Conversatorio. Además, se resaltó la necesidad de considerar a los territorios, con sus dinámicas y características propias, como elementos fundamentales al momento de pensar en estrategias REDD u otro tipo de intervenciones orientadas al manejo de sistemas forestales.



La institucionalidad puede ser entendida desde dos perspectivas: la primera, como el conjunto de estructuras que sirven de soporte a los procesos; y la segunda, como una característica interna de las organizaciones. La función de las instancias de acompañamiento debe ser preparar a las organizaciones locales para que estén en capacidad de formular sus propuestas, implementar sus ideas y ser los principales protagonistas de los procesos de desarrollo; fortaleciendo de esta manera su propia institucionalidad. Del lado de los gobiernos nacionales, la política ambiental y las estructuras de cada país juegan un papel determinante en la definición del tipo de arreglos necesarios para implementar estrategias REDD. En este sentido, además de promover la participación de los grupos comunitarios e indígenas, se debe promover la incidencia en los procesos de toma de decisiones que se realizan a nivel gubernamental.



Con relación a la integración de las comunidades indígenas, uno de los retos principales es lograr que la participación sea efectiva, con los representantes transmitiendo las ideas hacia el resto de la población. El fortalecimiento de los líderes y la formación de capital humano conforman la base de esa participación, y en ambos casos, el acceso a la información se convierte en un aspecto fundamental. Ante la falta de acuerdos y compromisos reales por parte de los países desarrollados y principales responsables de la situación ambiental actual, el rol de los pueblos indígenas es relevante en la búsqueda de soluciones a las problemáticas forestales y de cambio climático, al representar sus creencias, costumbres y prácticas como una manera diferente de relacionarse con los recursos naturales.

Las experiencias de manejo forestal comunitario en la región, en territorios de pueblos indígenas, presentan avances importantes. En Guatemala, la Fundación Laguna Lachuá, integrada por seis asociaciones de la etnia maya, se encuentra trabajando en acciones de conservación e incluye otras iniciativas productivas como turismo y artesanías, al tiempo que se procura mejorar los niveles de educación de las poblaciones locales. Una integración a las estrategias REDD, una vez realizados los procesos de consulta y garantizados los derechos de propiedad, acceso y uso a los recursos, no resultaría tan complicada en tanto ya se ejecutan acciones de conservación y captura de carbono en los territorios manejados por las comunidades indígenas.

GRUPOS DE TRABAJO: Temas para la incidencia ¿Qué hacer desde nuestros espacios en la región

PRESENTACION DE GRUPOS DE TRABAJO

Los grupos de trabajo buscaron responder a la pregunta ¿Qué hacer desde nuestros espacios en la región con relación al tema REDD, sus realidades y perspectivas? La discusión fue orientada a partir de dos aspectos: a) los procesos de consulta y participación; y b) oportunidades y amenazas de REDD para los derechos y la gobernanza en las zonas forestales.

Mecanismos y procesos de consulta y participación

Al abordar los procesos de consulta y participación, un primer elemento a considerar es el acceso a la información y, por consiguiente, con las desigualdades respecto al conocimiento sobre REDD reflejadas en los diversos niveles de conocimiento y comprensión que se presentan entre los actores (gobiernos nacionales, gobiernos locales, organismos de cooperación, ONGs, comunidades). Resulta difícil impulsar procesos de consulta si no hay igualdad de condiciones o, al menos, unos contenidos básicos manejados por todos. De ahí la importancia de promover el acceso a la información previa, a través de iniciativas de capacitación, sensibilización y concientización, dirigidas –entre otros públicos– a líderes comunitarios (incluyendo jóvenes), organizaciones de base y gobiernos locales.

La elaboración de un mapa de actores se convierte en una herramienta valiosa para identificar las instancias claves de participación, impulsando así el acercamiento y la articulación entre los gobiernos –nacionales, locales– y las comunidades. El análisis de las plataformas institucionales y los intereses de los actores involucrados son dos elementos adicionales que el mapa de actores puede aportar, y que sirven de insumos en la elaboración de propuestas para los procesos de consulta y participación. Ahora bien, algunas preguntas claves fueron planteadas: ¿quién dirige esos procesos?, ¿qué se va a consultar?, ¿cuál será la dirección de esas dinámicas de participación, vendrá desde las comunidades hacia arriba, o por el contrario, de los niveles superiores hacia abajo? Es importante reconocer la existencia de estructuras y autoridades locales con las que se ha venido trabajando, las cuales deben ser consideradas al momento de promover las consultas. Con relación al aspecto financiero, la pregunta claves es ¿Quién(es) paga(n) los procesos?

El grupo de trabajo logró identificar al menos tres tipos básicos de procesos de consulta y participación:

- 1) *Procesos formales*, con la presencia activa de los gobiernos nacionales, quienes finalmente tienen la última palabra sobre las condiciones en las que cada país participará en los procesos REDD.





- 2) *Procesos independientes*, impulsados desde las comunidades mismas, particularmente desde los pueblos indígenas, debido a que son quienes tienen las mayores cantidades de bosques y reservas naturales.
- 3) *Procesos de preparación*, que incluyen además acciones de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones existentes. La claridad en cuanto al tema REDD debe iniciar con las mismas instancias responsables de impulsar los procesos y dinámicas de participación.

La distribución de los beneficios es un factor muy importante y que seguramente concentrará gran atención durante las consultas de REDD. La negociación y el establecimiento de los acuerdos institucionales que servirán de marco regulador para la participación de cada uno de los actores, la relación entre costos y beneficios, así como entre amenazas y oportunidades, son elementos que deben quedar claramente definidos al construir una estrategia REDD. Varias etapas fueron señaladas como esenciales para poder impulsar iniciativas de este tipo: a) toma de decisiones; b) revisión de políticas públicas; c) implementación de las estrategias; d) creación de un eficiente sistema de monitoreo y verificación; y e) validación de los resultados obtenidos.

Finalmente, la definición de los tiempos necesarios para realizar las consultas implica el establecimiento de mecanismos claros y transparentes que garanticen la toma de las mejores decisiones, según sea cada caso en particular. Los procesos de capacitación previos, la retroalimentación y validación de las consultas en todos los niveles, la coherencia entre los procesos formales y no formales, y la coordinación intersectorial son elementos claves para impulsar adecuados procesos de participación y consulta.

Oportunidades y amenazas de REDD para los derechos y la gobernanza en las zonas forestales

Como resultado del trabajo en grupo, se lograron identificar tres amenazas principales derivadas de la posible implementación de estrategias REDD: tenencia de los derechos de uso; comunicación e información a las comunidades; origen y distribución de los recursos. En cuanto a las oportunidades, la posibilidad de fortalecer el liderazgo local, el establecimiento de alianzas, así como la construcción de propuestas que logren reconocer y/o consolidar los derechos, fueron las opciones señaladas.

A continuación se discuten las principales amenazas identificadas.

Falta de claridad y aplicación de las normas y leyes sobre tenencia de la tierra, derechos de acceso y uso de los recursos naturales

Los gobiernos están llamados a respetar los convenios internacionales, al tiempo que garantizan el cumplimiento de las leyes nacionales sobre los procesos de tenencia de la tierra. Las leyes deben

formularse como mecanismos que logren fortalecer a las organizaciones comunitarias en la defensa de sus bosques y recursos naturales. El Banco Mundial, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales pueden convertirse en entes vigilantes que exijan a los gobiernos el cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales, especialmente aquellas que obligan a realizar consultas a nivel comunitario para cierto tipo de proyectos e intervenciones (por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT). El conocimiento de los derechos por parte de las personas puede contribuir al aumento de los niveles de participación e incidencia, ambos aspectos fundamentales en la defensa de los derechos de las comunidades sobre el acceso y uso de los recursos. La posibilidad de establecer alianzas a nivel nacional e internacional influirá positivamente en la incidencia y la sensibilización a nivel internacional que pueden ser promovidas desde los gobiernos nacionales o a través de acuerdos regionales.

Debilidad en los procesos de comunicación e información

Analizar los procesos de comunicación e información implica comprender el funcionamiento de los procesos de toma de decisiones, identificar los actores con capacidad real para tomarlas, y los niveles en los que ocurren estas dinámicas. De esta manera, se pueden crear los espacios adecuados para canalizar la información relevante sobre la implementación de estrategias REDD que cumplan con ciertos principios de justicia social, respeto de derechos e igualdad en beneficio de las comunidades. Los medios de comunicación masiva (radio, televisión) pueden impulsar campañas nacionales de sensibilización sobre el valor de las tierras forestales para las comunidades y el resto del país; mientras que el aprovechamiento de tecnologías de información (ej. Internet) tendría un rol importante en la formación de líderes responsables y en el fortalecimiento de las capacidades ya creadas. De igual manera, el intercambio de experiencias y lecciones permite el aprendizaje y la transmisión de conocimiento proveniente de las buenas prácticas, al tiempo que se conocen y evitan ciertos errores. El poco conocimiento e información sobre los derechos y los deberes de las comunidades se puede convertir en un factor que limite la posibilidad de articular esfuerzos REDD con otros procesos de desarrollo.

Falta de claridad sobre el origen y los mecanismos de distribución de recursos

Sin lugar a dudas, tanto los mecanismos de financiamiento como los de distribución de recursos económicos que pudieran ser generados por las iniciativas REDD son temas complejos y sensibles, cuyo análisis está ligado a la necesidad de establecer reglas claras y acuerdos institucionales que garanticen transparencia. El hecho de considerar la participación en los mercados de carbono divide las opiniones entre quienes ven este escenario como una oportunidad económica, y aquellos que incluyen otros valores intangibles en el análisis. Si los actores no tienen claridad sobre estos procesos, los mismos se convertirán en fuentes de conflictos llegando a impedir la implementación más adecuada de las estrategias.



GRUPOS DE TRABAJO: Temas para la incidencia ¿Qué hacer desde nuestros espacios en la región?

Diálogo general entre participantes

- La falta de información y la necesidad de impulsar procesos de capacitación y sensibilización en diferentes niveles fueron aspectos comunes identificados, por los dos grupos de trabajo, como grandes necesidades de REDD. Ante la posibilidad de asignar recursos para estas actividades – y las ofertas técnicas en ese sentido – resulta importante consultar a las organizaciones y líderes territoriales sobre los contenidos prioritarios y demandas de conocimiento que provienen desde las comunidades mismas.
- Las comunidades indígenas deben establecer con claridad cuáles son sus expectativas respecto a REDD y, a partir de esta definición, trabajar en la elaboración de propuestas consensuadas que logren vincular diferentes actores. El aporte de estas propuestas puede contribuir al fortalecimiento de las posiciones de los gobiernos nacionales en los espacios internacionales de negociación. Necesitamos estrategias REDD que se articulen y que desencadenen esfuerzos enfocados en la superación de la pobreza.
- Un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra en la región indígena Lachuá en Guatemala fue el factor clave para impulsar proyectos de incentivos forestales, ordenamiento territorial, fortalecimiento de las organizaciones locales y de los procesos de toma de decisiones. La legalización de las tierras le permitió a las comunidades sentarse a negociar en mejores condiciones con socios estratégicos como el gobierno nacional. Si los conflictos derivados por la adjudicación de tierras no se resuelven, las intervenciones de REDD o de seguridad alimentaria no funcionarán al persistir los graves problemas y las desigualdades estructurales. Uno de los retos consiste en la selección de una plataforma regional que pueda apoyar el trabajo en esta dirección, considerando las propuestas del movimiento indígena y la formulación de políticas públicas nacionales que sirvan de soporte a las iniciativas locales.
- La propuesta de Panamá reivindica el concepto de seguridad territorial como uno de los requisitos fundamentales para la posible implementación de estrategias REDD. Sin la seguridad en el acceso y tenencia de la tierra, la seguridad alimentaria estaría comprometida, por lo que se debe exigir el cumplimiento de los convenios y declaraciones internacionales que regulan este aspecto.
- La creación de capacidades debe priorizar la educación como el principal camino para promover nuevas oportunidades de desarrollo capaces de crear las bases para superar las condiciones de pobreza extrema presentes en la región actualmente.



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: Lo que se está haciendo desde los territorios

El intercambio de experiencias propuesto inicialmente para esta sección del Diálogo se convirtió en un ejercicio donde los participantes se organizaron según país de procedencia; esto con el objetivo de caracterizar las distintas experiencias existentes y que están relacionadas directa o indirectamente con la temática de REDD en la región. La información recogida busca una mejor comprensión de la situación actual, el alcance e impacto de los procesos, la identificación de actores claves, tanto a nivel nacional como regional; al mismo tiempo que dimensione los requerimientos de las organizaciones y comunidades forestales, especialmente respecto a información y capacitación. De esta manera, se tendrán más claros los próximos pasos a seguir luego de este encuentro.

Los principales aspectos propuestos para ser incluidos en las caracterizaciones fueron los siguientes:

- a) *Área de influencia geográfica de los proyectos*, determinando la ubicación y extensión de los territorios comprendidos en las iniciativas y el tipo de vinculación de las organizaciones con esos territorios.
- b) *Regímenes de propiedad existentes*, es decir, las figuras legales vinculadas a la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales; incluyendo los acuerdos que sirven de base para el funcionamiento de comarcas (Panamá), tierras colectivas, concesiones a largo plazo (Petén), regiones autónomas, entre otros.
- c) *Acciones alternativas y complementarias*, por ejemplo, aquellas orientadas a la mitigación, manejo forestal, agricultura sostenible, reforestación, energía alternativa, etc.
- d) *Configuración del entorno de las organizaciones respecto al tema REDD*, incluyendo la identificación de actores, intereses, dinámicas de participación y niveles de involucramiento.
- e) *Requerimientos de apoyo* --información, capacitación, aspectos técnicos-- por parte de las organizaciones.
- f) *Principales figuras y mecanismos de intervención*, esto es, señalar el nivel y alcance de los instrumentos relacionados con las iniciativas (por ejemplo: políticas, programas, proyectos, sistemas de áreas protegidas y conservación, corredores biológicos, entre otros).



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: Hacia la construcción de estándares REDD+



El proceso de construcción de estándares para REDD+ es facilitado por la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad, y Care Internacional. Uno de sus principales aspectos es su carácter inclusivo, al involucrar gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, representantes de comunidades indígenas, instituciones de política internacional, centros de investigación, entre otros. Se espera que los estándares sirvan para: a) definir directrices que impulsen mejores prácticas y políticas de REDD+; b) evaluar el proceso de implementación de las estrategias REDD+; y c) evaluar la calidad y los impactos generados por las intervenciones. Además, a través del establecimiento de estándares socioambientales, se busca garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades dependientes del bosque, mientras se alcanzan beneficios sociales (mejoras en las condiciones de vida) y medioambientales (biodiversidad).

El éxito de los estándares deberá contribuir a gestionar apoyos para los programas a nivel internacional y dentro de los países, facilitando el acceso preferencial a ciertos fondos y fomentando un mejor desempeño en los aspectos sociales y ambientales de las intervenciones REDD+ y otros programas relacionados. A continuación se señalan una serie de principios que sirven de guía para la construcción de los estándares:

- Derecho a la tierra, a los territorios y a los recursos naturales.
- Los beneficios del programa son compartidos equitativamente entre todos los actores.
- Las estrategias de REDD+ contribuyen al fortalecimiento de los medios de vida sostenibles y al alivio de la pobreza en las comunidades dependientes de los bosques.
- REDD+ genera condiciones que propician el desarrollo sostenible y el logro de metas relacionadas con la buena gobernanza.
- La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas son mantenidos y mejorados.
- Todos los actores y titulares de derechos tienen acceso oportuno a la información adecuada y precisa, participando plena y eficazmente en REDD+.
- REDD+ garantiza el respeto y cumplimiento de las leyes locales, nacionales, así como de los acuerdos y tratados internacionales aplicables.

Finalmente, en el futuro se prevé la creación e implementación de un proceso de monitoreo, reporte y verificación, el cual será definido buscando asegurar la calidad de las evaluaciones.

AGENDA

Jueves 12 de noviembre

Inauguración del diálogo

Herman Rosa Chávez, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador

Victoria Flores, Vicepresidenta de la Junta Directiva de ACICAFOC

PANEL I: El contexto de REDD y las negociaciones internacionales sobre cambio climático

(Facilita: Susan Kandel, PRISMA)

- Negociaciones sobre Cambio Climático: El acuerdo que no acordaremos en Copenhague (Miguel Lovera, Asesor del Ministro de Ambiente de Paraguay)
- Negociaciones sobre cambio climático y REDD (Manuel Estrada, Experto en Cambio climático y REDD)
- ¿Es REDD una oportunidad verdadera para las comunidades? (David Kaimowitz, Fundación Ford)
- REDD y comunidades forestales: Preocupaciones y debate actual (Deborah Barry, Rights and Resources Initiative)

Diálogo general entre participantes**PANEL II: Posiciones, estrategias y acciones de los gobiernos de Mesoamérica con relación a REDD** (Facilita: Josué Lichtenstein, BIC)

- México (Ricardo Rivera, CONAFOR)
- Panamá (María Sujey Blanco, ANAM-Panamá)
- Guatemala (Marcel Oseida, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)
- El Salvador (Yvette Aguilar, Asesora del MARN en Cambio Climático)

Diálogo general entre participantes**PANEL III: Acciones e iniciativas de REDD en Mesoamérica**

(Facilita: Desiree Elizondo, Consultora)

- Fondo Cooperativo de Carbono Forestal (Greg Frey, Banco Mundial)
- Programa Colaborativo de las Naciones Unidas sobre REDD (Gabriel Labbate, UNEP-Panamá)
- Programa REDD de GTZ con Centroamérica y República Dominicana (Charlotte Haeusler, GTZ-El Salvador)
- Acciones REDD de UICN en Mesoamérica (Arturo Santos, UICN)
- Hacia un Programa REDD que beneficie a comunidades forestales en Mesoamérica (Nelson Cuéllar, PRISMA)

Diálogo general entre participantes

Viernes 13 de noviembre

CONVERSATORIO: ¿Qué está pasando y qué debería buscarse con REDD en los territorios de Mesoamérica?

(Facilita: Rubén Pasos)

- Carlos Marcelino, México (Servicios Ambientales de Oaxaca)
- Eduardo Sarmiento, Honduras (ACFOGG-Gualaco y Guata)
- Yanel Venado y Leovigildo Doviaza Machuca (Cacique General de Tierras Colectivas y Fiscal de COONAPIP, Panamá)
- Aurelia Patterson, Nicaragua (Vice-Alcaldesa de Rosita)
- Marcedonio Cortave, Guatemala (ACOFOP, Petén)

Diálogo general entre participantes

GRUPOS DE TRABAJO:

Temas para la incidencia ¿Qué hacer desde nuestros espacios en la región?

- Procesos de consulta y participación (Facilita: Josué Lichtenstein)
- Derechos y gobernanza en zonas forestales frente a REDD (Facilita: Ann Larson)

DIALOGO GENERAL:

Incidencia política frente a REDD+ en Mesoamérica

(Facilita: Alberto Chinchilla, ACICAFOC)

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué necesita la sociedad civil para una incidencia más efectiva a nivel nacional, regional e internacional?
- ¿Es necesaria una coordinación regional?

Sábado 14 de noviembre

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: LO QUE SE ESTÁ HACIENDO DESDE LOS TERRITORIOS

(Facilitan: Alberto Chinchilla y Rubén Pasos)

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ENTÁNDARES DE REDD+

Incidencia política frente a REDD+ en Mesoamérica

(Facilitan: Alberto Chinchilla y Rubén Pasos)

- Estándares de REDD+ (Ruth Quintanilla)

PUBLICACIONES RELACIONADAS

Memoria del Diálogo Regional. Crisis global y dinámicas territoriales en Centroamérica:
Implicaciones para la construcción de alternativas

Seminario-Taller Nacional

Energía, agua y ambiente: Implicaciones para políticas públicas
y para la Estrategia Nacional de Desarrollo

Memoria Foro Nacional

Turismo Rural Comunitario en El Salvador:
Una apuesta estratégica para el nuevo gobierno

Memoria de Seminario-Taller

Turismo y Desarrollo Inmobiliario en Centroamérica

Memoria de Taller metodológico

Territorialidad y movilidad humana en Centroamérica

Memoria de Encuentro

Turismo y patrimonio cultural en Centroamérica

Memoria de Encuentro Regional

Gestión Territorial Rural: Enfrentando el desafío de la superación de la pobreza
y el manejo de recursos naturales

Memoria de Diálogo Regional

Turismo en Centroamérica: Desafío para comunidades rurales y la gestión territorial

Taller de Intercambio

Desafíos y Potencialidades del Turismo Comunitario en Centroamérica

Memoria de Taller

Entre la Acumulación y la Resistencia:
Bosquejando las Nuevas Geografías de Centroamérica

Memoria de Taller Conceptual-Metodológico sobre Globalización y Territorialidad
en Centroamérica

Memoria de Taller Metodológico sobre Dinámicas Territoriales en Centroamérica



prisma@prisma.org.sv www.prisma.org.sv
 3ª Calle Poniente No. 3760, Col. Escalón, San Salvador
 Tels.: (503) 2298 6852; (593)2298 6853, (503)2224 3700; Fax: (503)2223 7209
 Internacional Mailing Address: VIP No. 992, P.O.Box 52-5364, Miami FLA 33152, U.S.A.